



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TESIS

**“PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURIDICAS EN EL PERU”**

ASESOR:
DR. RICARDO PONTE DURANGO

PRESENTADO POR:
HUGO GUSTAVO MORALES PEREZ

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

LAMBAYEQUE, 2018

Tesis denominada “PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS EN PERÚ”, presentada para optar el TITULO DE ABOGADO, por :

.....
Hugo Gustavo Morales Pérez
BACHILLER

.....
Dr. Ricardo Ponte Durango
ASESOR

APROBADO POR:

.....
Dr. Ezequiel Chavarry Correa
PRESIDENTE

.....
Dr. Francisco Delgado Paredes
MIEMBRO

.....
Dr. Lupercio Córdova Romero
VOCAL

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi esposa,
sin la cual no hubiera
podido realizar esto.

Y también dedico esta tesis a mis
padres y hermanos, quienes han
estado a mi lado y han sido un
verdadero apoyo para mí. Y, a
todos los que confían en mí y
valoran todos mis esfuerzos.

AGRADECIMIENTO

Deseo agradecerle especialmente al Dr. Ricardo Ponte Durango mi asesor de tesis, por su paciencia y asesoría para realizar de la mejor manera mi tesis, aportando ideas, sugerencias y haciendo las correcciones necesarias; que a su vez permitieron enriquecer la presente tesis. Le estoy muy agradecido.

INDICE

RESUMEN.....	7
INTRODUCCION.....	8

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.....	9
1.1. Planteamiento del problema.....	9
1.2. Formulación del problema.....	12
1.3. Justificación e importancia del estudio.	
1.3.1. Justificación del estudio.....	12
1.3.2. Importancia del estudio.....	12
1.4. Objetivos.	
1.4.1. Objetivo General.....	13
1.4.2. Objetivos Específicos.....	14
1.5. Hipótesis.....	14
1.6. Variables.....	14
1.6.1. Variable independiente.....	14
1.6.2. Variable dependiente.....	15
1.7. Métodos y técnicas de recolección de datos.	
1.7.1. Métodos.....	15
1.7.2. Técnicas.....	16

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

PARTE I: ANTECEDENTES HISTORICOS.....	17
1.1. Derecho Romano Clásico.....	18
1.2. Derecho Medieval y Derecho Canónico.....	20
1.3. Giro Conceptual a partir del S. XIX.....	23

PARTE II: DEFINICIONES DOCTRINARIAS	
2.1. Persona Jurídica.....	28
2.2. Responsabilidad Penal.....	37
2.3. Teorías sobre la culpabilidad de la persona jurídica.....	40
2.3.1. Culpabilidad por la conciencia especial de la persona jurídica.....	40
2.3.2. Culpabilidad por el espíritu normativo de la persona jurídica.....	42
2.3.3. Culpabilidad funcional del órgano.....	46
2.3.4. Culpabilidad por no evitación de los fallos organizativos de la persona jurídica.....	47
2.3.5. Culpabilidad por no evitación de las influencias criminógenas de la persona jurídica.....	48
2.3.6. Culpabilidad por el carácter de la empresa.....	49
PARTE III: REGULACION LEGAL EN EL PERU.....	50
3.1. Art. 105 y 105-A del Código Penal.....	50
3.2. Acuerdo Plenario N° 7-2009	52
3.3. Ley 30424.....	66
3.4.D.L. 1352(que modifica la ley antes citada).....	73
PARTE IV: LEGISLACION COMPARADA.....	79
4.1. Estados Unidos.....	79
4.2. Colombia.....	87
4.3. Nicaragua.....	88
4.4. Panamá.....	89
 CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS	
PARTE I: Gráfico 1.....	90
PARTE II: Gráfico 2.....	91
PARTE III: RESULTADOS.....	92
 CAPITULO IV: CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS	
PARTE I: Discusión de resultados.....	95
PARTE II: Conclusiones.....	99
PARTE III: Recomendaciones.....	100
BIBLIOGRAFIA.....	102

RESUMEN

Los debates penales son extremos en algunos ideales y marcos teóricos que se produjo con los criminólogos modernos y polemizan discutir el tema. El objetivo es, pues, para promover un enfoque innovador y una crítica paralela sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y demostrar que la responsabilidad penal de la corporación es totalmente compatible con la teoría tradicional del delito, de la culpabilidad y de las funciones de la pena, a condición de que adopten la tendencia moderna de la relajación de la dogmática jurídico penal y superar la visión única del Derecho Penal clásico, que incluye la perspectiva antropocéntrica en sentido estricto. La metodología que se utilizará en esta investigación es el método de exploración, pues pretende proporcionar una mayor familiaridad con el problema y hacerlo explícito, además de construir nuevas hipótesis. El procedimiento metodológico se utiliza en una amplia investigación en las doctrinas, en los medios electrónicos y especialmente en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores. Y como no podía dejar de hacer en un trabajo académico, también se realiza una búsqueda de Derecho Comparado, con vistas a una mayor profundización la evolución histórica y conceptualización teórica da conversión de los sistemas jurídicos argentino y brasileño. Por lo tanto, las Ciencias Penales no pueden quedarse inmóviles en el avance de la grande delincuencia causado por las personas jurídicas.

ABSTRACT

The criminal debates are extreme in some ideals and theoretical frameworks that occurred with the modern criminologists and polemics to discuss the subject. The aim is therefore to promote an innovative approach and parallel criticism on the criminal responsibility of legal persons and to demonstrate that the criminal responsibility of the corporation is fully compatible with the traditional theory of crime, guilt and the functions of The penalty, provided that they adopt the modern trend of relaxation of criminal legal dogmatics and overcome the unique vision of classic Criminal Law, which includes the anthropocentric perspective in the strict sense. The methodology that will be used in this research is the method of exploration, as it aims to provide greater familiarity with the problem and to make it explicit, in addition to constructing new hypotheses. The methodological procedure is used in an extensive investigation in the doctrines, in the electronic means and especially in the jurisprudence of the Superior Tribunals. And as he could not fail to do in an academic work, also a search for Comparative Law, with a view to further deepening historical evolution and theoretical conceptualization gives conversion of the Argentine and Brazilian legal systems. Therefore, the Criminal Sciences can not remain motionless in the advance of the great delinquency caused by legal persons.

INTRODUCCION

Las personas naturales cometen delitos y son responsables penalmente por aquellos actos que contravengan a la ley. Pero ahora surge la pregunta: ¿Podría una persona jurídica ser responsable penalmente?

Hasta hace unas décadas atrás el principio legal “societas delinquere non potest” (la sociedad o empresa no es responsable) era la única y gran verdad. Simplemente así, era tratado el asunto no solo en nuestro país, el Perú, sino también en muchos otros países de latinoamerica y el mundo.

Sin embargo, en el devenir del tiempo se ha debatido muchas veces esta idea en el mundo, y se han presentado y expuesto diversas teorías que se oponían a esto, es decir a la no existencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; pero ya en tiempos actuales se puede notar la tendencia muy marcada en varios países de reconocer dicha responsabilidad antes mencionada.

La discusión doctrinaria acerca de la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país se encuentran actualmente superada, existiendo aun algunas discrepancias respecto a los modelos de imputación que deberían regularse para tal efecto; y, en lo correspondiente a los ámbitos delictivos en los que esta nueva responsabilidad debería aplicarse.

Esta postura actualmente mayoritaria no ha sido acogida por el legislador peruano; sino que, por el contrario, en una reciente modificación normativa, a través de la promulgación de la Ley N° 30424, introdujo la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por la comisión de delito de cohecho activo transnacional. Y además junto al DL. 1352 que modifica a la ley antes mencionada.

Manteniendo, paralelamente, el vigente artículo 105° del Código penal, que establece la imposición de consecuencias accesorias contra las personas jurídicas que se vean involucradas en la ejecución, el encubrimiento o favorecimiento de un hecho ilícito.

Esta última modificación legislativa, bien puede ser entendida como un retroceso del legislador peruano frente a la iniciativa de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no debe opacar los avances ya realizados por la doctrina nacional.

Y aunque incluso para algunos esto podría significar un aliciente, sigue sin ser suficiente lo que se ha hecho hasta el momento a este respecto en nuestra legislación peruana actual.

CAPITULO I: ASPECTOS METOLOGICOS

I. ASPECTOS METODOLOGICOS .

2. REALIDAD PROBLEMÁTICA.

2.1. Planteamiento del problema.

Desde siempre se entiende que según el Código penal sólo las personas físicas pueden ser punibles. Otras personas o entes jurídicos no son susceptibles de ser sometidas al control penal y, por lo tanto, no pueden tener responsabilidad penal. Esta afirmación parece ser tan evidente que casi ningún Manual de Derecho penal ni tampoco ningún comentario del Código penal hacen referencia a la posibilidad de considerar a la persona jurídica como sujeto del Derecho penal.

En la actualidad el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es sumamente controvertido y se encuentra relacionada, fundamentalmente, al ámbito de los delitos económicos, es decir, a todas las acciones punibles y las infracciones administrativas que se cometen en el marco de la participación de una persona jurídica en la vida económica y en el tráfico jurídico.

Los casos en concreto que se presentan en la práctica se encuentran relacionados, fundamentalmente, con cuatro grupos principales de casos, en los cuales puede ser

relevante la sanción de la responsabilidad de la empresa: a) peligros contra el medio ambiente, b) peligros dentro de la empresa, c) peligros del producto y d) peligros en el ámbito del transporte. En este sentido, los casos de peligros contra el medio ambiente se refieren a los delitos contra el medio ambiente e infracciones de otras leyes sectoriales protectoras del medio ambiente, así como a delitos contra la seguridad colectiva los peligros dentro del ámbito de la empresa se relacionan con infracciones contra la seguridad dentro de la empresa, delitos de estafa y administración desleal, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la propiedad intelectual, delito fiscal; por otro lado, los peligros del producto puede dar lugar a delitos contra la vida e integridad física, adulteración de alimentos, delitos relativos a la manipulación genética ; por último, los peligros en el ámbito del transporte pueden dar lugar a infracciones contra las regulaciones del transporte terrestre, marítimo o aéreo.

De todos modos se debe tener en cuenta que la mayoría de los casos abarcan varios grupos al mismo tiempo. La delimitación de los ámbitos de peligro permite, sin embargo, evaluar los riesgos de responsabilidad de una empresa y determinar consecuentemente, entre otras cosas, el ámbito de la necesidad de un seguro para la empresa.

Las dificultades jurídicas de afirmar la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentran vinculadas a

cuestiones que conciernen al problema del sujeto y de la norma jurídica. En este sentido, los argumentos tradicionales utilizados para negar la responsabilidad penal de las personas jurídicas encuentran su fundamento en la incompatibilidad de la persona jurídica con las categorías dogmáticas de la acción y la culpabilidad, así como con la función y la esencia misma de la pena. La discusión sobre este tema ha girado siempre en relación a la incompatibilidad de dichos conceptos con la persona jurídica o en el intento de adaptación de ciertas categorías para permitir su aplicación a las personas jurídicas. Todos estos argumentos, tanto a favor como en contra de la responsabilidad penal de la persona jurídica, han estado y están marcados por la eterna comparación entre la persona física y la jurídica (bien para encontrar sus incompatibilidades, bien para encontrar sus semejanzas).

Sin embargo, todo intento que tome como punto de partida dichos presupuestos está destinado al fracaso. Es evidente, y la discusión de casi cien años en torno a este tema lo ha demostrado, que las diferencias entre uno y otro sujeto resultan insuperables. Por lo tanto, intento con esta investigación presentar una nueva perspectiva desde la cual enfocar este tema.

2.2. Formulación del problema.

¿Cuál es la relevancia de regular e incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la legislación peruana vigente?

2.3. Justificación e importancia del estudio.

2.3.1. Justificación del estudio.

Puedo señalar como razón justificante de esta investigación es que en el derecho penal peruano se ha estudiado poco sobre de la responsabilidad penal de las persona jurídicas y aun en la actualidad existiendo una criminalidad de empresa, es por eso que se debe conocer mejor los modelos de imputación, para mejorar la norma penal, por lo tanto en términos generales me refiero a la responsabilidad penal de la persona jurídica, como un tema verdaderamente controvertido.

Además, puedo indicar de que aun cuando existen algunas investigaciones referidas al tema en cuestión, son muy pocos los peruanos que hayan analizado el tema teniendo en cuenta la legislación actual y la problemática de la criminalidad de empresa la cual es claramente notoria.

2.3.2. Importancia del estudio.

La importancia de esta investigación, es que la comisión de

hechos delictivos en el ámbito de las personas jurídicas debe ser legitimado como sujetos imputables y cubrir los vacíos de punibilidad o corregir en todo caso, la deficiencia del art. 105 del código penal.

He decidido investigar del tema porque nos convoca el determinar a ciencia cierta si es posible atribuir sanciones penales propiamente a las personas jurídicas, resulta de suma importancia precisar el concepto de Persona Jurídica y analizar las teorías que intentan justificar su existencia y alcances dentro de la comunidad económica y la actividad empresarial.

Además, la importancia de investigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es de que ha sido difundido por la doctrina nacional y extranjera, y además en el mundo actual en el que vivimos, donde el poder económico de las empresas nacionales y extranjeras se ha incrementado, son estas las que se encuentran propensas a cometer diversos delitos los cuales deben ser debidamente castigados.

2.4. Objetivos.

2.4.1. Objetivo General.

Demostrar la relevancia jurídica de una adecuada regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a nuestro ordenamiento legal peruano vigente.

2.4.2. Objetivos Específicos.

- 1.- Desarrollar los antecedentes referidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas para un correcto análisis y comprensión del tema en cuestión.
- 2.- Demostrar cómo se encuentra regulada y la importancia que se le da, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación extranjera.
- 3.- Identificar los aspectos positivos o negativos que pudiera tener la nueva Ley N° 30424 y el DL. 1352 que modifica dicha ley. Ambos referidos a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

2.5. Hipótesis.

La relevancia de regular e incorporar a nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas, radica en que así se protegerá a la sociedad de la impunidad respecto a los delitos cometidos por las personas jurídicas en perjuicio de otras personas jurídicas o naturales.

2.6. Variables.

2.6.1. Variable independiente.

La relevancia de regular e incorporar a nuestra legislación la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2.6.2. Variable dependiente.

Protección a la sociedad de la impunidad respecto a los delitos cometidos por las personas jurídicas en perjuicio de otras personas jurídicas o naturales.

2.7. Métodos y técnicas de recolección de datos.

2.7.1. Métodos.

- **Método Histórico:** Es adecuado para el estudio de los antecedentes, de las causas y condiciones históricas en las que surge y desarrolla el objeto de materia de estudio e investigación.
- **Método Inductivo:** para sustraer aspectos que se suscitan en la realidad con la finalidad de establecer explicaciones generales.¹
- **Método Analítico:** El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su

¹ALVITRES,V."Método científico. Planificación de la investigación". pág. 205. Editorial Ciencia. Lima,2000.

esencia.²

2.7.2. Técnicas.

Aquí especificaremos las técnicas utilizadas en esta investigación.

- Acopio Documental.

Es una técnica sumamente importante en todo el proceso de investigación, ya que con esta técnica se acopia la información registrada en documentos diversos que estén al alcance del investigador y que sirvan para describir y explicar o de alguna manera poder acercarnos al objeto de estudio.

Se puede considerar documentos, a los libros, revistas, periódicos, cintas, disquetes, archivos o carpetas digitales o multimedia, en fin cualquier elemento que describa un hecho, o contenga información utilizable en la investigación.³

- Lectura.

Es la técnica que consiste en la captación de ideas y frases, separando conceptos generales de los accesorios.

² RUIZ LIMON, Ramón. "Historia y evolución del pensamiento científico" Pág.128. México,2009.

³RUIZ LIMON, Ramón. "Historia y evolución del pensamiento científico" Pág.130. México,2009.

- **Subrayado.**

Para dar énfasis a ciertas partes de un texto, se establece una jerarquización de ideas útiles para resaltar lo más importante, a fin de que el lector centre la atención en las palabras claves o partes del texto más importantes.⁴

- **Fichaje:** Técnica fundamental para el desarrollo del presente trabajo motivo de investigación, pues permitiendo la obtención de datos y poder almacenarlos en forma eficiente y precisa, empleándose las fichas de registro o bibliográficas, como las fichas hemerográficas y de resumen.⁵

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

PARTE I: ANTECEDENTES HISTORICOS

Resulta conveniente, aun cuando solo sea a efectos expositivos, hacer un análisis histórico de la responsabilidad penal de la persona no física. No obstante, el debate real de la situación surge en el Siglo XIX.

⁴ CERDA, H. "Los elementos de la Investigación". Editorial El Buho. Bogotá, 1991.

⁵ RINCÓN IGEA, D. Del; ARNAL, A.; LATORRE BELTRÁN; y SANS MARTÍN, A. "Técnicas de investigación en ciencias sociales". Editorial Dykinson. Madrid, 1995.

Siguiendo a SILVINA BACIGALUPO⁶, podemos distinguir cuatro etapas:

1.- Derecho Romano Clásico

El Derecho Romano no tuvo constancia conceptual de la persona jurídica, tal como hoy es entendida, aunque sí podemos extraer una fuente muy inicial de conocimiento acerca de la problemática a través del tratamiento dispensado al colectivo, como sujeto distinto a la mera suma de miembros que lo componían, y al que expresamente se le reconocían determinados derechos subjetivos.

El colectivo (o la *corporación*) más relevante era, sin duda alguna, el Municipio, ente al que según Ulpiano solo cabía reclamar por la conducta de sus administradores, por el lucro obtenido, negando en todo caso la responsabilidad por hecho propio de la corporación.

“Pero dudase si se da la acción de dolo contra los Municipios. Y opino, que, a la verdad, no puede darse por su dolo; porque ¿qué pueden hacer con dolo los Municipios? Pero si algún lucro les ha alcanzado por el dolo de los que administran sus bienes, juzgo que debe darse. Más por el dolo de los Decuriones se dará la acción de dolo contra los mismos Decuriones⁷”

⁶ BACIGALUPO SAGGESE, S: La Responsabilidad pena de las personas jurídicas, 1998, Editorial Bosch, Casa Editorial, SA. pág. 42.

⁷Digesto 4, 3, 15, 1, Traducción de Ildefonso García Corral (1889), página 16, Tomo I.

Aún entendiendo que es difícil, y en exceso especulativo, basar la génesis de la responsabilidad penal de la persona ficta en el Derecho Romano –básicamente porque tal sujeto no existía-, lo cierto es que en la época clásica sí se puede advertir, por un lado, la responsabilidad del municipio por los hechos realizados por sus administradores, y siempre que ello le hubiera reportado algún beneficio, y, por otro, la diferenciación y diverso tratamiento jurídico entre la persona individual (*singuli*) y el colectivo (*universitas*). Todo ello, en palabras de BACIGALUPO SAGGESE, puede ser considerado *como las raíces más profundas de la importante evolución que va a tener este tema en la Edad Media*⁸.

En cualquier caso, y si atendemos al Código Hermogeniano, concretamente a uno de sus textos que fue recopilado en el Digesto (*hominum causa omne ius constitutum est*), observaremos que la persona jurídica no fue una creación del Derecho Romano. Bien al contrario, *el destinatario final es siempre el hombre y sus intereses sean humanos o colectivos*⁹.

⁸BACIGALUPO SAGGESE, S: La Responsabilidad pena de las personas jurídicas, 1998, Editorial Bosch, Casa Editorial, SA, pág. 44.

⁹ GUIÑAZU MARIANI, M. en Las personas jurídicas en el Derecho Romano. XVII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina: Homenaje al Dr. Luís Rodolfo Arguello. PubliFadecs (Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, octubre de 2005.

2.- Derecho medieval y Derecho Canónico

Situados en la época de los glosadores y del resurgimiento del Derecho Romano, éste último constituye la base en donde se asientan las diversas teorías jurídicas surgidas en el medievo. Por ello, al no tener cabida el concepto de persona jurídica (como sucedía en el Derecho Romano), los juristas medievales no contemplaron el debate en torno a la responsabilidad corporativa, más allá de la responsabilidad colectiva de la mera agrupación de personas (*universitas*).

Es al derecho canónico a quien se debe que en el siglo XIII surgiera la locución “*Societas delinquere non potest*”¹⁰, atribuida a SINIBALDO DE FIESCHI (Inocencio IV).

Sin embargo, tal locución en modo alguno surgió con el carácter de principio general que hoy se le atribuye. Mas aún, ni tan siquiera el sentido original de la expresión iba referido a la corporación tal como hoy, en nuestros días, y a partir del S. XIX, se la conoce, ni mucho menos el propio SINIBALDO DE FIESCHI llegó a negar con carácter global la aptitud jurídica de la persona ficta para responder penalmente por sus actos. Como señala MARTÍNEZ BLANCO¹¹, *la intencionalidad de este canonista no era la de elaborar una teoría abstracta acerca del concepto o naturaleza de la persona jurídica,*

¹⁰Entendida como imposibilidad de imponer el castigo de excomunión a las corporaciones.

¹¹MARTÍNEZ BLANCO, en Derecho Canónico, Editorial DM, Murcia, 1995.

sino... tan solo la de apuntar una solución práctica para que se respetaran los derechos de esa colectividad como si de derechos de una persona se tratase.

A pesar de que la universitas, considerada ya como una persona ficticia¹², no tenía capacidad activa ni pasiva dentro de una conducta criminal (*impossibile es, quod universitas delinquat*) SINIBALDO DE FIESCHI sí entendía su capacidad de responsabilidad en el supuesto de que ésta conducta, cometida por el administrador, hubiera sido realizada por solicitud de los miembros del colectivo.

Como señalara SOUTO PAZ¹³, *la persona jurídica es una creación del derecho y en su formulación ha jugado un papel decisivo la doctrina canónica medieval*. Por ello, podemos concluir que la doctrina canónica es la verdadera precursora del actual concepto de persona jurídica, pues aunque la denominación como tal surge con la pandectística alemana de la Escuela Histórica del Derecho, ya RUFFINI¹⁴ indicó que la teoría de la ficción de Savigny era coincidente con la doctrina formulada por Sinibaldo de Fieschi.

En este mismo sentido MARTÍNEZ BLANCO¹⁵ afirma que es *la doctrina alemana del pandectismo la que introduce la denominación de persona jurídica y se pregunta sobre la naturaleza para dilucidar si*

¹² Sinibaldo indicaba que cuando una de estas colectividades intervenía en una causa debía "fingirse" que se trataba de una persona (MARTÍNEZ BLANCO, op. Cit.)

¹³ Souto Paz, en Derecho Canónico. Volumen 1. Edición Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. 1990.

¹⁴ GALLOSO MARIÑOS en "Las personas jurídicas de derecho privado en el derecho comparado"

¹⁵ MARTÍNEZ BLANCO, op. Cit.-

tenía una base o sustrato persona o real según estuviera constituida por un conjunto de personas o cosas, o mas bien habría que considerarse como una mera ficción del legislador.. de tal forma que RUFFINI advirtió que esta teoría de la ficción coincidía con la doctrina elaborada por Sinibaldo de Fieschi. Por tanto, es a éste último a quien se considera el autor que diferenció, por primera vez, al conjunto de personas de la persona resultante de esta agrupación.

Partiendo de la concepción canónica expuesta, BARTOLUS DE SASSOFERRATO en el S. XIV, atribuía capacidad delictiva al colectivo solo respecto de los hechos cometidos en el ámbito de su esencia y deber, y por los delitos de omisión de sus miembros, esto es, por la llamada delicta propia de la universitas.

Esta concepción de la persona jurídica vinculada de manera inexorable a un fin (entendido como ámbito de su esencia y deber) llega hasta nuestros días. Así, el Canon 114 del Código de Derecho Canónico, como sistematiza SOUTO PAZ¹⁶, define a la persona jurídica como *conjunto de personas o de bienes, cuyo fin –congruentes con la misión de la Iglesia y que trasciende al de los individuos singulares- se refiere a obras de piedad, apostolado o caridad, espiritual o temporal, y pueden ser constituidos en personas jurídicas eclesiásticas, bien por prescripción del derecho, bien por decreto de la autoridad eclesiástica competente.*

¹⁶SOUTO PAZ, op. cit.

3.- Giro conceptual a partir del S. XIX

Sin embargo, el punto de arranque en donde podemos situar el estudio de la corporación como sujeto de particular naturaleza y autonomía jurídica la encontramos en Savigny y Gierke (S. XIX), con perspectivas bien distintas en cada una de ellos.

Para Savigny, la persona jurídica no es más que una ficción del hombre para perseguir determinados fines jurídicos o, como dijera el propio autor, *“todo derecho es la sanción de la libertad moral inherente al ser racional, y por esto la idea de persona o sujeto de derecho se confunde con la idea de hombre pudiéndose formular la identidad primitiva de ambas ideas en estos casos: todo individuo y sólo el individuo tiene capacidad de derecho. Verdaderamente que el derecho positivo puede modificar la idea primitiva de la persona, restringiéndola o ampliándola, de igual modo que negar a ciertos individuos la capacidad de derecho en totalidad y en parte, y además, arrancando por decirlo así, dicha capacidad del individuo a estos seres ficticios se les llama personas jurídicas, es decir, personas que no existen sino para fines jurídicos¹⁷”*.

¹⁷LOPEZ WONG, R: “Acerca de la de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Determinación de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias: ¿Sanción penal o medida administrativa?”, en Urbe et Ius Revista de análisis Jurídico. Año I. Newsletter Nro. 6. Argentina. 2005.

De ahí que Savigny dijera que *“la persona jurídica es el resultado de una operación de puro fingimiento, puesto que solo el hombre, individualmente considerado, es persona para el derecho¹⁸”*.

Frente a esta visión jurídica de ficción se sitúan Girke y Jellinek, para los que la persona jurídica es una realidad que va mas allá de la voluntad de las personas físicas que la dirigen. Concretamente Girke, y tal y como recuerda GRACIA¹⁹, afirmaba que *una persona jurídica debe ser concebida como una persona real, en la cual se agrupan seres humanos, con una única y común fuerza de voluntad y de acción para el cumplimiento de los fines que superan la esfera de los intereses individuales, de modo que entidades de este tipo llegan a alcanzar un elevado grado de concentración y organización manifestando en el plano social una sustancial unidad capaz de intervenir en nombre propio en la vida jurídica activa*.

Así, si para Savigny la persona jurídica era una creación del Estado –que era quién dotaba artificialmente de personalidad a una entequeia²⁰- para Gierke el Estado solo tenía facultades declarativas, toda vez que la verdadera personalidad del ente se derivaba de sus órganos, esto es, de la voluntad colectiva –no individual- de las personas físicas que la componen. Como afirma

¹⁸SAVIGNY, M. F. C de; Durán y Bas, Manuel (pról.). Sistema del Derecho Romano Actual, Reimp. de la edcn. de Madrid, Centro editorial de Góngora. Analecta Editorial ANALECTA. 2004. ISBN:84-96012-42-5

¹⁹GRACIA, MARTÍN L. en La cuestión de la responsabilidad de las propias personas jurídicas”. Revista Peruana de Ciencias Penales N° 4- Julio-Diciembre de 1994.

²⁰Para el cumplimiento de sus propios fines.

PALIERO²¹ mientras la intervención del Estado - en la teoría de la ficción - tiene valor constitutivo; en la doctrina real, sólo tiene valor declarativo. Mediante dicha intervención, el Estado se limita a reconocer un hecho ya consolidado en la realidad.

Solo a partir de estos autores es posible hablar con propiedad de persona jurídica²², y por tanto, solo en fechas posteriores existe un debate en torno a la responsabilidad de estos sujetos.

Ya en el ámbito penal, Von Liszt²³ (y en igual sentido PRINS) expresó que la persona jurídica podía ser sujeto de responsabilidad penal ya que *“quién puede concluir contratos, también puede concluir contratos ilícitos o usurarios o incumplir los contratos concluidos”*. Sin embargo, la comprensión de la acción en VON LISZT *como cualquier movimiento corporal y su comprensión de la pena desde la prevención especial positivista, no permiten deducir una responsabilidad directa de la persona jurídica*²⁴.

Según BACIGALUPO SAGGESE, *V LISZT promueve la instauración de un sistema de doble vía introduciendo las medidas de seguridad, permitiendo de esta forma la aplicación de dichas medidas a sujetos no capaces de culpabilidad.*

²¹PALIERO, C.E. Problemas y perspectivas de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho italiano. Anuario de Derecho Penal de la Universidad de Fribourg, 1996.

²²Autores como Ferrara, Kelsen, Ross, Hart, Scarpelli, D'Alessandro y más recientemente Ascarelli, Arangio-Ruiz, Magni, Vittorio Frosini, entre otros, han dedicado gran parte de su obra al concepto de persona jurídica.

²³Von LISZT, Tratado de derecho penal Madrid, Editorial Reus, 1929.

²⁴BACIGALUPO SAGGESE, S: La Problemática del Sujeto en el Derecho Penal. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE, 1997.

Excedería del objetivo de la presente tesis hacer una relación prolija de los aspectos esenciales por los que han discurrido los debates doctrinales, no solo en Derecho Penal, en torno a la persona jurídica. Sin embargo, y dentro de este recorrido histórico, es preciso mencionar la importantísima opinión de FERRARA.

Este autor, partiendo de la concepción de SAVIGNY, señalaba que la personalidad jurídica *es un producto del ordenamiento jurídico, y surge por el reconocimiento del derecho objetivo*²⁵. Por tanto, es el ordenamiento jurídico el que es soberano para dotar de personalidad jurídica a quién considere oportuno y, en consecuencia, no puede buscarse un derecho natural -previo al propio ordenamiento- para encontrar la preexistencia de personalidad²⁶.

Para FERRARA, *cuando el ordenamiento jurídico concede la calidad de persona a entes que no son seres humanos debe tenerse en cuenta que esta atribución de personalidad no es otra cosa que una forma de realización de intereses humanos. De lo contrario carecería de vigencia la aseveración formulada por Hermogeniano: “omne jus hominum causa constitutum est”*²⁷. Dicho de otro modo, solo a la satisfacción y cumplimiento de intereses humanos se debe que el ordenamiento jurídico dote de personalidad a ciertos entes; ente que,

²⁵FERRARA, F. Teoría delle persone giuridiche, UTET, primera edición, Torino, 1923.

²⁶Ejemplo de ello es el reconocimiento de personalidad, en el derecho romano, a Dioses (como a Apolo y Júpiter) o a Incitatur, caballo de Calígula.

²⁷FERNÁNDEZ SESSAREGO, C. Naturaleza Tridimensional de la persona jurídica. Derecho PUC”, nº 52, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, abril-diciembre de 1999

por tanto, no tienen ni intereses propios ni vida autónoma más allá de los fines para los que ha sido creado.

Interesa adelantar en este momento que nuestra concepción de la persona jurídica se corresponde con la de una entidad creada por el derecho y adscrita de manera esencial y exclusiva a un fin que queda predeterminado en su propia constitución.

PARTE II: DEFINICIONES Y TEORIAS DOCTRINARIAS

1. LA PERSONA JURÍDICA

La necesidad social de organización siempre ha sido importante dentro del proceso de desarrollo de toda sociedad y de manera más particular para el hombre, esto responde a la propia naturaleza de la especie humana tantas veces estudiada y que es intelectualmente atrayente para el derecho.

Podemos decir que la respuesta a la carencia y seguridad fue lo que motivo que el hombre busque a seres de su misma especie para encontrar una respuesta a las desavenencias que se presentaban en su diario accionar como fueron la búsqueda de alimento y protección. Si hacemos una mirada a la historia encontraremos ese “animus societas” del hombre desde los inicios de su presencia en la tierra con lo cual podemos animarnos a concluir que siempre ha estado presente. Concordamos con el Dr. Espinoza el cual al análisis la génesis del presente tema manifiesta lo siguiente: “el ser humano desde tiempos remotos ha actuado colectivamente en tanto que su existencia es y siempre ha sido coexistencia, era necesaria la constitución de grupos para que el hombre sobreviva”²⁸

²⁸ Espinoza, Juan (2004) Derecho de las Personas. Lima. Gaceta Jurídica. p.651

Dentro de este proceso evolutivo es el derecho como producto cultural que se convierte en la disciplina que regula el accionar de la persona dentro de la sociedad de la cual forma parte pero no solo de manera particular sino también desde un aspecto grupal como eran las organizaciones de personas o entes colectivos que nacieron como resultado de la concurrencia de finalidades similares u afines entre los que la conforman, estas pueden ser de distinta índole como por ejemplo comunitarias, políticas, de ayuda, etc.

Buscar una vinculación con el derecho responde sobre todo en una finalidad de ordenar el desarrollo de la misma, bajo ese principio de equilibrio y de igualdad en donde el respeto y la participación de los demás tienen que estar siempre presente estos aspectos para una normalidad en el transcurso de los hechos y acontecimientos. Al respecto el Dr. Fernández Sessarego en opinión que compartimos manifiesta lo siguiente: “las organizaciones de personas que actúan en la experiencia social sin reducirse a una unidad formal, fueron exiliadas del mundo jurídico. Estas organizaciones del personas que han existido desde los albores de la humanidad y que han participado de la actividad jurídica como auténticos y verdaderos sujetos de derecho, merecieron de un sector ampliamente dominante de la doctrina, el ser designados como entes de hecho, irregulares, no personalizados, no obstante que eran realidades actuantes en el mundo del derecho que es primariamente, nada más y nada menos, que el mundo de la vida

humana social”²⁹

Grupos, comunidades, entidades colectivas, Personas Colectivas, Persona Jurídica, son distintas denominaciones que ha recibido esta figura a lo largo de su tratamiento tanto de parte de las ciencias sociales como del Derecho, la denominación varía de acuerdo al enfoque que le otorga la sociedad como tal, a su vez responde al momento en el cual esta figura ha sido estudiada, y la influencia de cómo las personas entendían el derecho aplicado a esta institución. Es acertado entonces lo que manifiesta el Dr. Morales Godo cuando afirma: “hoy nadie puede discutir la importancia de las personas jurídicas... indudablemente fueron los intereses existenciales sociales y económicos que fueron dando origen, en la realidad, a las agrupaciones de seres humanos”³⁰

El motivo del presente trabajo es otorgar a la comunidad en general un estudio, actual sobre lo que entendemos jurídicamente como Persona Jurídica, sin dejar de lado la parte de la tradición romano, germánica como el Derecho Canónico es importante el aporte dado por el Derecho Alemán y sobre todo por el Derecho Italiano con el Código de 1942 constituyéndose en los principales aportes que ha tomado el Código Peruano.

²⁹ Fernández, Carlos (2009) Los 25 Años del Código Civil Peruano de 1984. Lima, MOTIVENSA, p.633.

³⁰ Morales Godo (2009) Instituciones del Derecho Civil. Lima, Palestra Editores, p .406.

Hablando ya de un aspecto más cercano en nuestro país con el Código de 1984 como lo señalan una parte importante de la doctrina extranjera se ha modernizado como mejorado el estudio y el tratamiento de las personas jurídicas a comparación con el tratamiento que le otorgaba el Código Civil de 1936 lo cual expresa un avance y marca un avance del legislador nacional en torno al análisis e innovaciones necesarias de este tema.

Como es natural el avance tecnológico y las propias necesidades que se presentan dentro de la sociedad han desencadenado que el estudio de las personas jurídicas no se limite a lo que señala nuestro Código Civil, en materia de este tema encontramos que el Reglamento de Registro de Sociedades, aprobado por Resolución de la Superintendencia de los Registros Públicos Nro. 200 – 2001 – SUNARP – SN publicado en el diario el Peruano el 27 de Julio del 2001 y el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias aprobado por la Resolución de la Superintendencia de los Registros Públicos Nro. 086 – 2009 – SUNARP / SN publicado el 1 de Abril del 2009 sumándose a este tratamiento con la anterioridad del caso la Ley General de Sociedades que complementan y especializan el tratamiento de esta temática dando una salida viable a un tratamiento más completo de esta figura como tal. Bien lo manifiesta De Belaunde cuando acertadamente expresa: “ en el campo de las personas jurídicas, si admitimos que estas son instrumentos en manos del legislador para facilitar la organización de la sociedad en sus diversos campos vemos que las crecientes y cambiantes exigencias sociales plantean al derecho el reto de la creación de nuevas figuras de personas

jurídicas o cambios en las existentes”³¹

Quien se acerque a este trabajo encontrara dentro del mismo, una óptica renovada sin que se deje de lado la apreciación de la doctrina tradicional ya que en nuestro medio existen muy pocos trabajos que de manera directa y especializada hayan tratado el tema de la Persona Jurídica, en la mayoría de los casos encontramos esta temática desarrollada en los Libros dedicados al derecho de las personas, y artículos en las diversas revistas que de manera periódica se emiten dentro del ámbito nacional.

Quien termine de leer este trabajo y sienta que la temática es ágil y no tediosa además de asimilar los conceptos de forma clara producto de la combinación de la tradición jurídica doctrinal con los conceptos modernos de lo que son las Personas Jurídicas habrá alcanzado la finalidad de los que participamos en este producto intelectual.

- Denominación

A lo largo del tiempo lo que hoy conocemos como persona jurídica, no siempre ha sido llamado de esa manera sino que para llegar a ese término, que en la fecha es el más aceptado las diferentes concepciones que sobre esta figura han tenido han sido dadas de acuerdo al grupo social y la regulación jurídica que a este tema se le entregaba en ese momento.

³¹ De Belaunde, Javier (2000) El Código Civil del Siglo XXI. Lima, Ediciones Jurídicas. p.250.

Como hemos podido apreciar lo que hoy conocemos con el nomen iuris de persona jurídica, es resultado de una serie de denominaciones que se han venido dando en el devenir del tiempo y en las teorías que han surgido para darle sustento a la misma por parte de la doctrina como de la legislación.

Comenzaremos expresando que el primer término es el de persona ficta, persona abstracta, la cual es recogida por el derecho canónico, luego la regulación francesa predominó el término persona civil, o también denominado persona moral, el Código Civil Italiano de 1865 recogió el término cuerpos morales, y la normatividad especial italiana la llamo ente colectivo, ente jurídico y finalmente abrazaron la denominación más utilizada que fue el de personas jurídicas.

El Código Alemán de 1900, gracias a la influencia de Savigny, los juristas alemanes adoptaron el término de Persona Jurídica, el cual finalmente es adoptado por el Código Civil Italiano de 1942.

Existen múltiples posiciones que han tratado de dar un concepto cabal en torno a lo que entendemos por persona jurídica pero siempre han existido enfoques que han buscado otorgarle cabalmente una definición, lo que encontramos son avizoramientos que tratan de dar un concepto todas estas coinciden en establecer que la Persona Jurídica nace como resultado de una necesidad de reunión de varios seres humanos con el objetivo de lograr una meta o fin.

Otros tratan de entender esta figura como una abstracción que es resultado de la creación del hombre y que su composición es distinta de las personas que lo conforman así la persona jurídica debería de ser entendida como una entidad, un ser que existe en función a los entes o personas de la que está hecha.

- Características

Para comenzar debemos de señalar que los rasgos más importantes que destacan dentro de lo que son las Personas Jurídicas se sustentan en aquellos signos ineludibles que van a estar siempre presentes, expresamos que las que vamos a desarrollar no son las únicas sino que estas pueden variar o ampliarse de acuerdo al grado de interés y desarrollo con que se enfoque esta institución:

- 5.1.-Son resultado de la unión de dos o más personas naturales y jurídicas.
- 5.2.-Buscan concretizar un fin o interés común de todos los miembros que la conforman.
- 5.3.-Su tratamiento debe de ser diferenciado del que se da a cada uno de sus miembros.
- 5.4.-Son entidades abstractas, con existencia ideal.
- 5.5.-La ley les reconoce una capacidad más restringida que la concedida a las personas naturales.

5.6.-Cumplen finalidades de mayor amplitud que las personas naturales.

5.7.-Es sujeto de derecho y deberes desde el momento de su constitución, siempre y cuando cumpla con los fines con los que fue constituida, y para los que se ha destinado un patrimonio.

De esta manera podemos enfocar los rasgos comunes que pueden encontrarse al momento de formar una persona jurídica sin tomar en cuenta su finalidad y los requisitos particulares que tienen al momento de su composición las cuales hacen que existan clasificaciones distintas que buscan sistematizar, ordenar a las personas jurídicas.

- Naturaleza jurídica

Existen múltiples teorías que han buscado explicar la naturaleza de la persona jurídica a lo largo de la historia cada una de ellas se justifica en un criterio cercano a las ideas que se aplicaban al derecho como disciplina.

La primera de las mismas se sostiene en la Teoría de la Ficción Legal la cual tiene como máximo representante a Savigny el cual expresa que con la finalidad de cubrir las exigencias del comercio jurídico y las demás exigencias que se dan dentro de la realidad en la que se desarrolla el hombre el legislador finge que entidades diversas del ser

humano tienen, a la par de estos atributos propios de lo que es la persona. Se podría decir que es una extensión de la categoría de lo que es la persona humana dando vida a lo que se denomina personas u entidades artificiales.

Otra teoría que ha dejado sentada las bases de una explicación de lo que es la Persona Jurídica o que trata de explicarla es la de Von Gierke, según esta teoría, las personas jurídicas son organismos naturales dotados a la par del hombre de una voluntad propia y titulares de un interés propio, distinto de aquel de sus miembros, el comportamiento externo de este ente es resultado de la unificación interior del mismo, mediante la adopción de una organización corporativa interna.

La que permite traducir y extender la voluntad de varias personas en una sola y nueva voluntad.

Una tercera teoría es aquella sustentada por Francisco Ferrara, el cual expresa que la persona jurídica tiene en común con la persona humana la calidad de sujeto pero la persona jurídica no actúa dentro de la realidad, para esta teoría la Persona Jurídica tiene una realidad netamente formal es decir reconoce el carácter artificial de este ente nuevo que es la persona jurídica al cual le da consistencia la normatividad es decir las leyes, el derecho de forma general.

Por último, una cuarta teoría se basa en la Teoría Tridimensional del Derecho la cual expresa que la entidad reconocida con la denominación de Persona Jurídica para su actuación dentro de la sociedad está

conformada por normas, valores y comportamientos recogida esta teoría en primer lugar por lo que expresaba Cossio con su teoría ergológica, luego recoge la influencia de Miguel Reale, en nuestro país el mayor exponente de la misma es el profesor Carlos Fernández Sessarego.

Esta innovación es recogida por el Código Civil de 1984 al momento de llevar a cabo el tratamiento respectivo de las cuatro (4) personas jurídicas que recoge, una forma de observar en la realidad la plasmación de los tres requisitos de la Teoría Tridimensional son los siguientes, el comportamiento el cual es llevado a cabo por las personas que conforman la persona jurídica, las normas que regulan su accionar y los valores lo vemos concretizado en el comportamiento y en la conducta que las personas deben de seguir dentro de la persona jurídica.

2. RESPONSABILIDAD PENAL

EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD: Es un concepto abstracto y que genera una gran cantidad de definiciones, así tenemos que en la vida diaria como en el derecho es uno de los más comunes, constantemente hacemos referencia al concepto “responsable o responsabilidad”, como bien lo señala Sanz Encinar³², es uno de los conceptos más utilizados por los seres humanos. En diferentes circunstancias podemos emplear dichos desde cuando nuestro padres nos dicen que somos responsables de tender la cama una vez que nos

³² SANZ ENCINAR, Abraham, El concepto Jurídico de Responsabilidad en la Teoría General del Derecho, UAM, México, 1998.

hayamos levantado, hasta cuando el policía de la esquina nos dice que somos responsables de darnos una vuelta prohibida, estos conceptos aunque señalen lo mismo, son diferentes por su ámbito de aplicación, podemos pasar desde la responsabilidad moral, gremial, política, hasta llegar a la responsabilidad jurídica, que es la que nos ocupa en este caso.

Por existir diversas formas de concebir la responsabilidad, es que iniciaré el presente estudio, partiendo de su estructura general, es decir mediante el análisis de la responsabilidad en la teoría general del derecho, lo cual nos dará las bases para entender el concepto de responsabilidad en la diferentes ramas del derecho.

La responsabilidad se ha desarrollado sobre todo en el ámbito civil, pero desde luego teniendo presencia también en el ámbito penal, ya que esta se extiende prácticamente a todas las áreas del derecho, hasta el ámbito administrativo, laboral, comercial, etc. Y de esta forma tenemos que el concepto de responsabilidad es parte vital de todo ordenamiento jurídico, pues como lo ha establecido Hans Kelsen, en todo orden jurídico debe existir una norma que lleve consigo una sanción, la cual en muchos casos obliga a responder de los daños causados y particulariza como responsable a una persona determinada, conformando con ello la norma perfecta, diría el propio Kelsen.

SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD

Dentro de las formas de estructurar la responsabilidad jurídica, tenemos principalmente dos grandes sistemas, el primero, el de la

Responsabilidad Subjetiva, y segundo el de la responsabilidad Objetiva, cuyas diferencias son notables y muy importantes para determinar e imputar el daño a un responsable.

A. La Responsabilidad Subjetiva

En este sistema de responsabilidad la característica es la conducta, siendo la culpa del autor la conducta determinante para la imputabilidad de la responsabilidad, por ello es muy importante en cada caso de responsabilidad analizar detalladamente la acción u omisión y el grado de culpa en que incurrió para con ello determinar la responsabilidad.

B. La Responsabilidad Objetiva

Es tal vez la más importante de las responsabilidades por lo que la doctrina ha dedicado más tiempo para analizar este tipo de responsabilidad. La responsabilidad objetiva también es conocida como responsabilidad por riesgo creado, e implica que cualquier situación que genere, por su propia naturaleza, un riesgo para los terceros se tiene como una responsabilidad objetiva, pues para determinar quién es el responsable no se tiene que analizar la conducta y con ello el grado de culpa del causante, sino que por el simple de encontrarse en este supuesto de riesgo, se es responsable y se tiene que reparar el daño generado, y ,en su caso, los perjuicios causados.

De esta forma, la responsabilidad objetiva es la que de mejor forma garantiza la reparación del daño, pues no se tiene que entrar al estudio

de la culpa y solo analiza el resultado, por lo que, en un sistema jurídica tan ineficiente como el mexicano, resulta benéfico que de una forma directa y sin necesidad de un amplio análisis de cada caso se tenga al responsable, esto ha generado que en ciertos ámbitos se desarrollen los seguros contra daños y se protejan situaciones de riesgo que puedan dañar su economía.

Finalmente, a este respecto y con lo antes mencionado podemos señalar que “La Responsabilidad Penal” podemos definir la responsabilidad penal como el deber jurídico que se impone a un individuo imputable de responder de su acción antijurídica prevista en el Código Penal como delito, de la que es culpable, debiendo sufrir sus consecuencias jurídicas.

3. TEORIAS SOBRE LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURIDICA

Debemos analizar las teorías existentes sobre la culpabilidad de la persona jurídica. Se trata de un conjunto de teorizaciones y que son, siguiendo la sistematización de GÓMEZ-JARA³³ las siguientes:

3.1.- Culpabilidad por la conciencia especial de la persona jurídica.

Teoría creada por HAFTER, quién considera que la voluntad de la persona jurídica puede ser individualizada de la voluntad de las

³³GÓMEZ-JARA. Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Civitas, Thomson Reuters. 2012

personas físicas que la componen, distinguiendo entre la formación de dicha voluntad (actuación conjunta de los miembros o del órgano) y la ejecución de dicha voluntad (que puede coincidir o no con el sujeto que ha formado su voluntad, por ejemplo en el caso de que la ejecución se lleve a cabo por personas que no participan del órgano de administración)

Para HAFTER, la *voluntad especial* de la persona jurídica surge cuando existen discrepancias entre la voluntad que se deduce del acuerdo conjunto de sus miembros y entre cada una de las voluntades individuales de los miembros que forman el conjunto. Es decir, la persona jurídica tiene voluntad propia, según este autor, cuando la voluntad decidida para la persona jurídica no coincide con la que individualmente tienen los miembros del grupo.

Consideramos, sin embargo, que aún cuando pudiéramos aceptar que en tal caso existen dos voluntades diferentes, no podemos olvidar que esta supuesta y singular voluntad no es el resultado de una decisión propia de la persona jurídica sino del interés de los miembros del grupo sobre los fines deseados o queridos para ésta.

Dicho de manera gráfica, los miembros de un consejo de administración pueden estar en desacuerdo en que la sociedad de capital que dirigen salga del mercado internacional, y sin embargo deciden abandonar este mercado por cuestiones de índole económico o de infraestructura. Es cierto que, en este caso, la sociedad manifiesta

una voluntad distinta a la de sus miembros, pero no es menos cierto que tal voluntad se ha formado por estas mismas personas físicas con el fin de organizar el fin patrimonial de la sociedad, por lo que –de facto- la sociedad sigue sin tener voluntad propia. Su voluntad no es sino aquella que se ha decidido por el juego de mayorías y por el concreto interés del momento de las personas físicas que la dirigen, sin que a aquella le quepa la posibilidad de discrepar.

Es más, imaginemos que un acuerdo de este tipo es posteriormente impugnado en vía judicial por un acreedor que entiende que tal decisión, adoptada incorrectamente, limita el capital de la sociedad y, tras el proceso pertinente, se obtiene una sentencia que lo anula. En este caso ¿puede considerarse que el Juez sustituye también la voluntad de la sociedad? En realidad, lo único que ocurre es que el Juzgado anula –por no ser jurídicamente válido, desde un punto de vista formal o material- la decisión voluntaria del órgano pero no de la sociedad; Ésta, también sin discrepar, tan solo actualizaría–si queremos seguir a Luhmann- el contenido de su configuración estratégica por lo que un juez ha decidido.

3.2.- Culpabilidad por el espíritu normativo de la persona jurídica.

Debida a BUSCH, esta teoría parte de la idea de que la voluntad de la persona jurídica es producto de la voluntad de todos los miembros que la componen, de tal manera que, de ser culpable esta voluntad, la culpabilidad será predicable de todo los sujetos que forman el colectivo.

Como señala GÓMEZ – JARA, y según BUSCH, *en realidad no existen inocentes en la persona jurídica ya que todos han participado en la creación de esa atmósfera o espíritu.*

La idea principal de esta teoría de la culpabilidad se basa en que la participación de un sujeto en una persona jurídica atribuye una especial obligación de actuar, de forma que su omisión es la que fomenta la actuación delictiva de la persona jurídica y, por ende, de los miembros que la componen.

Dicho de otra manera, la persona jurídica actúa según se ha decidido, bien por acción, en el caso de los miembros que apoyan la decisión criminal, bien por omisión, en el caso de aquellos que, debiendo actuar, han omitido realizar cualquier hecho que hubiera evitado la conducta delictiva de aquella.

Con independencia de que podamos decir ya que esta teoría no resuelve la culpabilidad propia de la persona jurídica, debemos indicar que la tesis obvia las reglas de actuación de los órganos colegiados y, lo que es peor, olvida que se pueden dar circunstancias en las que algunos miembros, aún perteneciendo al consejo de administración, ni han participado en la decisión ni han tenido cauces para su evitación. De hecho, este asunto está prácticamente resuelto en la jurisprudencia cuando, a la hora de abordar la responsabilidad de sujetos como miembros de órganos colegiados, éstos prueban que no participaron favorablemente en la decisión que luego resultó ser delictiva, quedando excluidos de toda culpa. No solo nos referimos a

entidades mercantiles, sino incluso a órganos colegiados de Derecho Público (*cabe señalar que el autor al cual hacemos referencia señala a la legislación española*).

Como indica PÉREZ CEPEDA³⁴, y recuerda IBÁÑEZ SORRIBES³⁵, *el administrador de una sociedad* “adquiere un compromiso de contener el riesgo solamente sobre la fracción que representa su voto en la adopción del acuerdo.

Y cuando vota manifiesta su negativa a apoyar el acuerdo para delinquir (voto en contra) y está colocando la barrera de contención sobre la parte de riesgo que en ese momento ejerce el control para impedir la producción del peligro.

Por ello su voto en contra en ningún caso puede ser idéntico estructuralmente al de aquellos administradores que votaron a favor y que contribuyeron a la adopción del acuerdo.

El administrador que vota en contra se separa del proceso que pueda desencadenar en un resultado delictivo.

La cuestión no es totalmente pacífica en la doctrina, pues, contrariamente a quienes sostienen esta exención de responsabilidad,

³⁴ PÉREZ CEPEDA, A.I.: La Responsabilidad de los administradores de Sociedades: criterios de atribución, Cedecs, Barcelona 1997.

³⁵ IBÁÑEZ SORRIBES, B. La abstención de voto en los órganos colegiados de las Corporaciones Locales. ¿Responsabilidad penal por acción u omisión?. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 19, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Oct. 2010, Ref. 2812/2010, pág. 2812, tomo 3, Editorial LA LEY. Juzgados, Nº 19, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Oct. 2010, Ref. 2812/2010, pág. 2812, tomo 3, Editorial LA LEY.

existen autores que entienden que el miembro del órgano colegiado ocupa una posición de garante frente al bien jurídico protegido, *adquiriendo un compromiso de actuar a modo de barrera de contención de determinados riesgos. Siguiendo a IBÁÑEZ SORRIBES, podemos distinguir, dentro de estos autores, a aquellos que consideran que dicha posición de garante surge de un deber jurídico extrapenal (Tiedemann, Vogel, Terradillos Bacoso, Valle Muñiz y Sánchez Álvarez), de aquellos otros que consideran que la posición de garante surge de su dominio de organización (Bottke, Frisch, Schünemann, Schmidt, Welp, Jakobs, Silva Sánchez, Batista González, Martínez-Bujan Pérez, Lascuraín Sánchez).* En definitiva, para este sector doctrinal la responsabilidad de los miembros de órganos colegiados puede producirse por acción (caso de votar favorablemente un hecho que resulta ser constitutivo de delito) o en comisión por omisión (por no haber evitado el resultado desde su posición de garante). En igual sentido, DÍAZ-MAROTO y POLO³⁶ que justifican en esta posición la condición de partícipe (dado el dominio de la evitación del hecho) y no la de autor (al no dominar su causación).

Posiblemente por esta posición de garante, y para incluir un modo de individualizar la responsabilidad de los sujetos que dominan a la persona jurídica, el Legislador ha tenido a bien introducir una modificación sustancial en el artículo 31 bis.(legislación española) Esta modificación, todavía en fase de proyecto, matiza la cuestión indicando que la persona física que comete el delito debe ser representante legal o actuar individualmente o como integrante de un órgano de la persona

³⁶ DÍAZ MAROTO, J./ POLO, J. en Problemas generales de aplicación de los delitos societarios. Edit. Ceura, 2002.

¹⁸ PÉREZ CEPEDA, A.I.: La Responsabilidad de los administradores de Sociedades: criterios de atribución, Cedecs, Barcelona 1997.

jurídica, estando autorizado para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentando facultades de organización y control dentro de la misma.

Aún siendo consciente de que la cuestión desborda por completo el objeto de la investigación , comparto plenamente la opinión de PÉREZ CEPEDA³⁷ al reconocer que los deberes objetivos de garante sólo podrán ser tenidos en cuenta, atendiendo a las circunstancias de tiempo y lugar que rodean al comportamiento en cuestión y el compromiso efectivo que cada administrador haya asumido en concreto en la protección del bien jurídico en peligro. Por tanto, sólo los administradores que durante el transcurso de la votación de un acuerdo delictivo, asumieron esta posición de garante específica, tendrán el deber de actuar como barrera de contención del riesgo, evitando así, la producción del resultado.

3.3.- Culpabilidad funcional del órgano

En otro sentido, SCHROTH³⁸, entiende que la culpabilidad de la persona jurídica se ha de entender como aquel comportamiento defectuoso –desde perspectivas jurídico/penales- formado por el sumatorio de los comportamientos individuales de las personas físicas que componen –desde un punto de vista organizativo u orgánico- la empresa.

SCHROTH considera que el resultado de esa suma es independiente del comportamiento aislado de los miembros, es decir, que para

³⁸HJ SCHROTH, Unternehmen als Normadressaten und Sanktionsobjekte, Giessen, 1993; en Fehlentwicklungen, insbesondere bei Grossrisiken, Baden Baden, 1995.

este autor existe de manera diferenciada una voluntad individual de la persona física que es miembro del grupo y otra voluntad colectiva que es la que justifica una responsabilidad penal del ente.

Entendemos que es aplicable lo que ya dijimos más arriba respecto de la teoría de culpabilidad por el espíritu normativo de la persona jurídica, y allí nos remitimos.

3.4.- Culpabilidad por no evitación de los fallos organizativos de la persona jurídica

Intentando evitar los inconvenientes de una concepción de la culpabilidad colectiva, HIRSCH³⁹, distingue entre una culpabilidad individual y otra de la persona jurídica, aunque afirma acto seguido que para que pueda hablarse de una responsabilidad de la persona jurídica es necesario como *condictio sine qua non* un órgano que actúe por ella. De ahí que GÓMEZ JARA señale que *“dicha exigencia viene motivada por el hecho de que la culpabilidad requiere siempre una concreta referencia psíquica al hecho y, claro está, la persona jurídica carece por sí misma de una psique.*

Para HIRSCH la culpabilidad de la persona jurídica se hallaría en la evitabilidad del hecho penal por parte de la corporación. Para este autor se trata de un *problema teórico prelegal, un problema que va más allá del Derecho y que incumbe igualmente a filósofos, sociólogos y teólogos, puesto que el Derecho versa sobre un «quid» preexistente,*

³⁹ HIRSCH, H.J.: «La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas», en ADPCP, 1993.

sobre una realidad sociológica (CUADRADO RUIZ⁴⁰).

3.5.- Culpabilidad por no evitación de las influencias criminógenas de la persona jurídica

Por su parte, EHRHARDT, destaca el especial deber de la persona jurídica para actuar contra aquellos elementos criminógenos que puedan surgir al hilo de su actividad, siendo responsable del delito cometido por quién actúa en su representación, siempre que la persona jurídica, en su relación interna con el individuo, haya podido evitar la conducta criminal. Para cimentar esta relación interna, como punto de evitabilidad del delito, ERHARDT *acude a la capacidad de la persona jurídica para influir en el comportamiento de sus miembros a través de su cultura corporativa*⁴¹, ya que la corporación tiene plena capacidad para motivar a sus empleados, bien para que estos cometan conductas delictivas para alcanzar sus fines empresariales, bien para exigir de éstos un comportamiento adecuado y fiel a la norma.

Es decir, la autora –en términos parecidos a la teoría del defecto de organización- entiende que la persona jurídica es responsable por haber permitido el descontrol interno que posibilita la conducta penal.

En la medida que atribuye la responsabilidad a la persona jurídica por el hecho penal de su representante –propiciada por un

⁴⁰ CUADRADO RUIZ, M^a ÁNGELES. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un paso hacia adelante...¿Un paso hacia atrás? Revista Jurídica de Castilla Y León. 2007.

⁴¹ GÓMEZ JARA, en Tratado de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Civitas, Thomson Reuters. 2012.

descontrol organizativo que pudo haber evitado- no acepta la posibilidad de causas de exculpación, dado que se le reprocha el delito de su representante y no esa falta de control interno.

3.6.- Culpabilidad por el carácter de la empresa

Originada por LAMPE, este autor entiende que la culpabilidad de la empresa es una consecuencia del mantenimiento de una cultura criminógena debida a un sistema defectuoso de organización. De ahí que este autor entienda que la responsabilidad de la corporación derivaría de su propio ser y no de sus acciones, es decir, el sistema corporativo, en estos casos, se mantiene sobre la base de una deficiente organización (o filosofía criminógena), de tal forma que esta desorganización actuaría como caldo de cultivo para la realización de cualquier acción delictiva dentro de su seno, lo que le llevaría directamente a la asunción de responsabilidad.

En palabras de LAMPE, y como recuerda GÓMEZ-JARA, *de la misma manera en que nadie puede alegar en su defensa que no pudo hacer nada acerca de su carácter defectuoso, tampoco puede alegarlo la empresa.*

PARTE III: REGULACION LEGAL EN EL PERU

Las siguientes leyes son las que regulan el tema que estamos analizando en esta investigación:

- *Artículo 105 y 105-A del Código Penal.*
- *Acuerdo Plenario N° 7-2009/cj-116, del 13 de noviembre del 2009, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DEL PERU. (referida al art. 105 del código penal)*
- *Ley 30424 y su DL.1352 que lo modifica.*

- Artículo 105 del Código Penal.

Art. 105.- Medidas aplicables a las personas jurídicas.

Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas

en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

5. Multa no menor de cinco ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias.

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será mayor de cinco años.

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por un periodo de dos años.

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no impedirá la aplicación de estas medidas.

Artículo 105°-A.- Criterios para la determinación de las consecuencias aplicables a las personas jurídicas.

Las medidas contempladas en el artículo anterior son aplicadas de forma motivada por el juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, según corresponda:

1. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas.
2. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible.
3. La gravedad del hecho punible realizado.
4. La extensión del daño o peligro causado.
5. El beneficio económico obtenido con el delito.
6. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.
7. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica.

La disolución de la persona jurídica se aplica siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó habitualmente para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.

**-Acuerdo Plenario N° 7-2009/cj-116, del 13 de noviembre del 2009,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DEL PERU.
(referido al art. 105 del código penal)**

ACUERDO PLENARIO N° 7-2009/CJ-116

FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: PERSONAS JURÍDICAS
Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.-

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente:

ACUERDO PLENARIO

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal.

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo Penal a fin de

delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización del V Pleno Jurisdiccional Penal , aprobado por Resolución Administrativa número 286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia los problemas suscitados con motivo de la aplicación de las medidas contra las personas jurídicas, previstas en el artículo 105° del Código Penal de 1991 –en adelante CP-, modificado por el Decreto Legislativo número 982, en tanto que se advierte que sus disposiciones no son aplicadas y desarrolladas jurisprudencialmente como corresponde. Ante tales defectos, en especial porque la ley material no desarrolló suficientemente los presupuestos básicos para su debida implementación y porque en los Distritos Judiciales que siguen rigiéndose por el Código de Procedimientos Penales –en adelante, ACPP- el legislador no implementó disposiciones sobre el particular, resulta conveniente que este Supremo Tribunal fije los criterios o directivas indispensables para su correcta utilización en sede judicial.

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema abordado, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en concordancia con la

función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder Judicial.

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se ratificó como ponente al señor PRADO SALDARRIAGA, quien expresa el parecer del Pleno.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Problemática actual.

6°. El CP incorporó sanciones de carácter penal aplicables a las personas jurídicas y las denominó consecuencias accesorias. Con esta decisión político criminal la legislación nacional procuraba establecer un inédito nivel de respuesta punitiva frente a aquellos delitos donde resultase involucrada una persona jurídica. Lo cual, por lo demás, se adhería a una consolidada tendencia en el derecho comparado [KLAUS TIEDEMANN: Derecho penal y nuevas formas de criminalidad, Editorial Grijley, Lima, 2007, página 92 y ss.].

7°. Sin embargo, a más de dieciocho años de vigencia del CP el desarrollo jurisprudencial producido en torno a las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas no ha resultado relevante ni satisfactorio. Efectivamente, la imposición judicial y concreta de estas sanciones ha permanecido, todo ese tiempo, ignorada o muy alejada de la praxis funcional de la judicatura penal en todas las instancias. Esta constatación resulta trascendente en la actualidad, pues el artículo 105° CP, luego de las modificaciones introducidas el año 2007 por el Decreto Legislativo 982, dispone preceptivamente la aplicación jurisdiccional de estas consecuencias accesorias siempre que se verifiquen los requisitos y presupuestos que dicha norma establece.

8°. Dos factores concurren etiológicamente en la explicación de tal actitud de los jueces nacionales. En primer lugar, la ausencia de reglas

específicas de determinación y fundamentación en el CP, que sólo enumera las sanciones aplicables y señala de modo muy general los presupuestos generales para su utilización concreta. Y, en segundo lugar, la carencia de normas procesales precisas en el ACPP, que no han sido objeto de una ley complementaria en armonía con las exigencias de la ley penal material, para emplazar e incorporar procesalmente a las personas jurídicas involucradas con un hecho punible. El necesario desarrollo normativo ha sido cumplido por el nuevo Código Procesal Penal de 2004 –en adelante, NCPP–, pero, como se sabe, su vigencia es progresiva y no comprende hasta el momento varios Distritos Judiciales.

§ 2. Algunos aspectos dogmáticos generales.

9°. En el Código Penal las consecuencias accesorias se encuentran ubicadas en el Capítulo II del Título VI del Libro Primero - Parte General. Únicamente los artículos 104° y 105° CP se refieren a consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una persona jurídica, siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o encubrimiento de un delito. Sin embargo, estas dos disposiciones aluden a consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. Efectivamente, en el artículo 104° CP se regula una especie de responsabilidad civil subsidiaria que deberá afrontar la persona jurídica ante las limitaciones económicas de sus funcionarios o dependientes vinculados en la comisión de una infracción penal. Y en el artículo 105° CP se detalla un amplio catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos.

10°. La problemática dogmática y procesal que corresponde evaluar en este Acuerdo Plenario se remitirá, exclusivamente, a la segunda de tales normas, pues la primera, si se cumplen sus presupuestos y en lo que fuera pertinente, cabe incorporarla en sede procesal con arreglo a las normas sobre el tercero civilmente responsable. Al respecto, cabe señalar, conforme lo ha resaltado uniformemente la doctrina nacional, que los antecedentes del artículo 105° CP se remontan al Proyecto de Código Penal de setiembre de 1989 (artículos 103° a 105°), que tuvo como fuente legal extranjera al Anteproyecto de Código Penal español de 1983 (artículos 136° a 138°).

11°. Si bien subsiste un delineado debate en la doctrina nacional sobre el concepto y la naturaleza que corresponde asignar a esta modalidad

de las consecuencias accesorias, su estructura, operatividad, presupuestos y efectos permiten calificar a las mismas como sanciones penales especiales [PERCY GARCÍA CAVERO: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 757 y ss.]. En primer lugar, porque la legitimidad de su aplicación demanda que las personas jurídicas sean declaradas judicialmente como involucradas - desde su actividad, administración u organización- con la ejecución, favorecimiento u ocultamiento de un hecho punible, sobre todo por activos y criminógenos defectos de organización o de deficiente administración de riesgos. Y, en segundo lugar, porque su imposición produce consecuencias negativas que se expresan en la privación o restricción de derechos y facultades de la persona jurídica al extremo que pueden producir su disolución. [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Las consecuencias accesorias aplicables a las Personas Jurídicas del artículo 105° CP: Principales Problemas de Aplicación. En: Anuario de Derecho Penal 2003, página 484 y ss.].

12°. Es pertinente distinguir que este tipo de sanciones penales no son penas accesorias como la de inhabilitación que define el artículo 39° CP. No son, pues, un complemento dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito. Su calidad accesorio, vicaria o paralela deriva, más bien, de un requisito o condición esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación judicial, cual es la necesaria identificación y sanción penal de una persona natural como autora del hecho punible en el que también resulta conectada, por distintos y alternativos niveles de imputación, un ente colectivo [LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas en el artículo 105° CP, a más de quince años de su vigencia. En: Problemas fundamentales de la Parte General del Código Penal (JOSÉ HURTADO POZO, editor), Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad de Friburgo, Lima, 2009, página 493 y siguientes]. Se trataría, pues, de una especie de exigencia normativa que opera como una condición objetiva de imposición de consecuencias accesorias.

§ 3. Alcances y limitaciones del artículo 105° CP.

13°. Actualmente, luego de las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo número 982, el artículo 105° CP tiene la siguiente estructura normativa:

“Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deberá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes:

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no excederá de cinco años.
2. Disolución y liquidación de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité.
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité por un plazo no mayor de dos años.
4. Prohibición a la sociedad, fundación, asociación, cooperativa o comité de realizar en el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será mayor de cinco años.

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenará a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurídica hasta por un período de dos años.

El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, no impedirá la aplicación de estas medidas”.

14°. Del citado artículo es posible señalar que el Juez debe imponer consecuencias accesorias siempre que se verifique en el caso concreto, cuando menos, lo siguiente:

- A. Que se haya cometido un hecho punible o delito.
- B. Que la persona jurídica haya servido para la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito.
- C. Que se haya condenado penalmente al autor, físico y específico, del delito.

Ahora bien, en dicha norma coexisten cuatro clases de consecuencias accesorias que el juez penal puede imponer a una persona jurídica. Cada una de las cuales tiene distinta configuración y efectividad. Resulta, por tanto, necesario identificar, seguidamente, sus principales características y funciones.

15°. Las consecuencias jurídicas previstas en el citado artículo 105° CP, tienen las siguientes características y funciones:

- A. El inciso 1) dispone la clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos. Es decir, regula sanciones que afectan el funcionamiento de los ambientes físicos e inmuebles en los cuales la

persona jurídica realiza sus actividades organizacionales y operativas.

Cuando la clausura sea temporal no puede durar más de cinco años. Es importante precisar que para que proceda esta medida el local o establecimiento tiene que haber servido para la comisión, favorecimiento, facilitación o encubrimiento del delito [JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA: Las consecuencias jurídico-económicas del delito, Editorial Idemsa, Lima, 2001, páginas 310 y 311].

B. El inciso 2) considera la disolución de la persona jurídica. Es la sanción más grave que se podría imponer a un ente colectivo [JOSÉ HURTADO POZO: Personas jurídicas y responsabilidad penal. En: Anuario de Derecho Penal 1996, Responsabilidad penal de las personas jurídicas, página 148. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ: Obra citada, páginas 488/499]. Por tanto, la disolución debe de quedar reservada, entre otros casos, para aquellos donde la propia constitución, existencia y operatividad de la persona jurídica, la conectan siempre con hechos punibles, situación que generalmente ocurre con las denominadas personas jurídicas de fachada o de papel. En estas empíricamente se ha detectado no un defecto de organización sino un evidente defecto de origen de la organización. Pero, también, cabe disponer la disolución de la persona jurídica, en supuestos donde se identifique una alta probabilidad de que aquella vuelva a involucrarse en delitos o peligrosidad objetiva de la persona moral.

C. El inciso 3) regula la suspensión de actividades de la persona jurídica. Esta sanción sólo puede ser impuesta con carácter temporal y sin exceder a dos años. La suspensión de actividades puede ser total o parcial. Sin embargo, ella, en su opción parcial, deberá recaer solamente sobre aquellas actividades estratégicas u operativas específicas que se relacionaron con el delito cometido o con su modus operandi y efectos [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA: La persona jurídica en el nuevo proceso penal. En: El nuevo proceso penal. Estudios Fundamentales, Editorial Palestra, Lima, 2005, página 329]. La suspensión total deberá justificarse por la absoluta naturaleza ilícita del quehacer ejercido por la persona jurídica.

D. Por último, el inciso 4) contiene la prohibición de realizar actividades futuras de aquellas que involucraron a la persona jurídica con la comisión, favorecimiento o encubrimiento de un hecho punible. Esta modalidad de consecuencia accesoria puede ser temporal o definitiva. En el primer caso la prohibición no puede extenderse más allá de cinco años. Con esta sanción se afecta la operatividad posterior al delito del ente colectivo. Tiene, pues, un claro sentido de inhabilitación para su desempeño futuro. No obstante, el alcance de

esta sanción es limitado y especial, pues no puede extenderse hacia otras actividades no vinculadas con el delito.

16°. En el artículo 105° CP no existen reglas de determinación que orienten la aplicación judicial, así como la justificación interna o externa de las decisiones jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma contempla. No obstante, esta limitación normativa puede ser superada, de modo transitorio, recurriendo a la implementación judicial de los criterios adoptados, para tal efecto, por el artículo 110° del Anteproyecto de Reforma de la Parte General del Código Penal de la Comisión Especial Revisora creada por Ley número 29153 [Véase: Congreso de la República: Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal, J&O Editores Impresores SAC, Lima, 2009], en tanto en cuanto sus postulados en modo alguno son implicantes con los establecidos por el vigente CP y constituyen reglas de desarrollo plenamente derivadas desde los principios de lesividad, proporcionalidad y prevención incorporados positivamente en el Título Preliminar del Código Penal. Por tanto, corresponde utilizarlos en todo proceso de determinación judicial, cualitativa y cuantitativa, de las consecuencias accesorias que deban imponerse en un caso concreto. Tales criterios son los siguientes:

- A. Prevenir la continuidad de la utilización de la persona jurídica en actividades delictivas.
- B. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el hecho punible.
- C. La gravedad del hecho punible realizado
- D. La extensión del daño o peligro causado.
- E. El beneficio económico obtenido con el delito.
- F. La reparación espontánea de las consecuencias dañosas del hecho punible.
- G. La finalidad real de la organización, actividades, recursos o establecimientos de la persona jurídica.
- H. La disolución de la persona jurídica se aplicará siempre que resulte evidente que ella fue constituida y operó sólo para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas.

17°. Es pertinente destacar que por su naturaleza sancionadora, las consecuencias accesorias imponen que su aplicación judicial observe, también, con justificada racionalidad, las exigencias generales que derivan del principio de proporcionalidad concreta o de prohibición del

exceso. En tal sentido, el órgano jurisdiccional deberá evaluar en cada caso la necesidad especial de aplicar una consecuencia accesoria en los niveles de equidad cualitativa y cuantitativa que correspondan estrictamente a las circunstancias del suceso sub iudice y según los criterios de determinación anteriormente detallados. Ello implica, pues, que excepcionalmente, el Juez puede decidir omitir la aplicación de tales sanciones a una persona jurídica cuando lo intrascendente del nivel de intervención e involucramiento del ente colectivo en el hecho punible o en su facilitación o encubrimiento, hagan notoriamente desproporcionada su imposición.

Por lo demás, cabe recordar que estas opciones jurisdiccionales no son ajenas a nuestra legislación vigente y se expresan normativamente en el sentido y función del artículo 68° del Código Penal, al tratar de la exención de pena. No obstante, es de demandar siempre que esta clase de decisiones sean consecuencia de un riguroso análisis fáctico y normativo, y que ellas sean motivadas de manera específica y suficiente.

18°. En el artículo 105° CP también se incluyen salvaguardas a favor de los derechos de terceros: trabajadores y acreedores, los que pudieran resultar afectados con la imposición de consecuencias accesorias a la persona jurídica. Por consiguiente, el Juez está autorizado por dicha norma para disponer, ante la autoridad competente, la intervención del ente colectivo sancionado hasta por dos años. Con esta medida se procura controlar o paliar los efectos transpersonales que, necesariamente, producirán la aplicación de una o más consecuencias accesorias, sobre el patrimonio o la estabilidad laboral de personas ajenas al quehacer ilegal de la persona jurídica o de sus órganos de gestión. Sin embargo, esta posibilidad de promover la intervención, por su propia naturaleza y operatividad, sólo debe utilizarse cuando se impongan consecuencias accesorias de efectividad temporal como la clausura de locales o la suspensión o prohibición de actividades.

Finalmente, el artículo 105° CP, en su último párrafo, declara que la imposición de consecuencias accesorias no será afectada o mediatizada por acciones fraudulentas u encubridoras, dirigidas maliciosamente a la frustración de la decisión judicial como “El cambio de la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria,...”.

§ 4. Consecuencias accesorias, persona jurídica y proceso penal.

19°. En el ámbito procesal toca delinear las garantías y los procedimientos que deben viabilizar la aplicación judicial de

consecuencias accesorias a una persona jurídica. En este espacio debe definirse el procedimiento más idóneo que asegure, con puntual observancia de los principios y garantías procesales constitucionalmente relevantes, la presencia y la intervención en un proceso penal del ente colectivo; así como la identificación de las partes legitimadas y de las características fundamentales de una dinámica contradictoria que sea idónea para debatir, sin mengua de las garantías del debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia, la relevancia penal de la concreta intervención de una persona jurídica en el hecho sub iudice.

En algunos sistemas jurídicos extranjeros es también la legislación material la que demanda la habilitación de este escenario procesal. Así, por ejemplo, en España el artículo 129° del Código Penal advierte que las consecuencias accesorias aplicables a una persona jurídica requieren de una audiencia previa donde ella pueda alegar, a través de sus representantes legitimados, lo que le sea favorable (“El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias”).

20°. En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las consecuencias accesorias, por su efectividad sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal con todas las garantías. La persona jurídica, entonces, tiene que ser emplazada y comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado judicial con absoluta capacidad para ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanar de las garantías de defensa procesal –derecho de conocimiento de los cargos, de asistencia letrada, de defensa material o autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de prueba, de alegación, y de impugnación- y de tutela jurisdiccional –en especial, derecho a una resolución fundada y congruente basada en el derecho objetivo y derecho a los recursos legalmente previstos-.

Con tal efecto, la persona jurídica deberá ser comprendida expresamente en sede de instrucción en una resolución judicial de imputación – en el auto de apertura de instrucción o en un auto

ampliatorio o complementario-, circunscripta a la posible aplicación de consecuencias accesorias, ello sin perjuicio de que concurrentemente pueda haber sido pasible de una imputación en el proceso civil acumulado como tercero civil. Es evidente que nadie puede ser acusado, sin antes haber sido comprendido como procesado o sujeto pasivo del proceso, a fin de que esté en condiciones razonables de ejercer el conjunto de derechos necesarios para afirmar su pretensión defensiva o resistencia: derecho a ser oído, a probar e intervenir en la actividad de investigación y de prueba, a alegar sobre los resultados de aquella actividad, y a impugnar.

Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el Título III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que pueden concluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad especial de consecuencia accesoria [PABLO SÁNCHEZ VELARDE: El nuevo proceso penal, Editorial Idemsa, Lima, 2009, página 80]. Esta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización de un proceso penal de corte unitario que comprenderá tanto a personas naturales como jurídicas, aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención a la naturaleza particular del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema probandum que le conciernen [JULIO CÉSAR ESPINOZA GOYENA, Obra Citada, página, 314].

21°. En el NCPP las normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal se encuentran comprendidas entre los artículos 90°/93°. Cada una de estas normas legisla aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y garantías reconocidos a las personas jurídicas, así como sobre la actividad procesal que estas pueden desplegar.

La morfología y función de tales disposiciones es la siguiente:

A. El artículo 90° NCPP identifica a las personas jurídicas que pueden ser partes procesales y objeto de emplazamiento por la autoridad judicial. En él se fijan los presupuestos necesarios para el emplazamiento y la incorporación formal de una persona jurídica en un proceso penal. Al respecto, el presupuesto esencial que exige dicha norma se refiere a la aplicación potencial sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias accesorias que contemplan los artículos

104° y 105° CP. Esta disposición también concede al Fiscal legitimación exclusiva para requerir ante la autoridad judicial dicho emplazamiento e incorporación procesal. Tal norma, por lo demás, no obsta a que, respecto del artículo 104° CP y en sus estrictos marcos, el actor civil tenga legitimación activa conforme a la concordancia de los artículos 11°, 104° y 105° NCPP.

B. El artículo 91° NCPP disciplina la oportunidad y la tramitación del emplazamiento e incorporación procesal de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma señala que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la Investigación Preparatoria, luego de comunicarle su decisión formal de continuar con las investigaciones y hasta antes de que se declare concluida la investigación preparatoria. En este artículo se detallan también los datos básicos de identificación que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes:

(i) La identificación de la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera).

(ii) El domicilio de la persona jurídica (sede matriz o filiales).

La solicitud, además, debe señalar, de modo circunstanciado, los hechos que relacionan a la persona jurídica con el delito materia de investigación. Por tanto, se debe referir la cadena de atribución que la conecta con acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello, se tiene que realizar la fundamentación jurídica que justifique incluir al ente colectivo en el proceso.

La tramitación que deberá darse a la solicitud será la misma que detalla el artículo 8° NCPP para el caso de las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones.

C. El artículo 92° NCPP trata de la representación procesal de la persona jurídica. La norma establece que el órgano social de la persona jurídica debe designar un apoderado judicial. Sin embargo, se excluye de dicho rol a toda persona natural que esté comprendida en la misma investigación y bajo la imputación de los mismos hechos que determinaron el emplazamiento y la incorporación procesal de la persona jurídica. La norma dispone, además, un plazo de cinco días para que el órgano social de la persona jurídica cumpla con designar al apoderado judicial. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera realizado tal designación la hará el Juez de la Investigación Preparatoria.

D. En el artículo 93° NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen a la persona jurídica dentro del proceso

penal. Al respecto, se reconoce a la persona jurídica procesada, en tanto resulten compatibles con su naturaleza, los mismos derechos y garantías que corresponden, en un debido proceso legal, a toda persona natural que tiene la condición de imputado. Principalmente, el derecho a una defensa activa, a la posibilidad de contradicción procesal, a la impugnación dentro de la ley de toda resolución que la cause gravamen. E. El apartado 2 del artículo 93° NCPP regula una situación especial de contumacia o rebeldía de la persona jurídica procesada la cual, sin embargo, en ningún caso, puede generar que se afecte o suspenda la continuación del proceso.

22°. La vigencia escalonada del NCPP en el país, como se ha destacado, limita la utilidad de las normas procesales alusivas a la persona jurídica y, por ende, dificulta la aplicación judicial de las consecuencias accesorias en muchos Distritos Judiciales. Por tal razón y tomando en cuenta las reglas y el procedimiento fijado por aquel para dicha finalidad, corresponde postular un conjunto de criterios operativos en aplicación directa de los principios procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, conforme a lo dispuesto, en lo pertinente en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso penal, a cuyo efecto se tendrá en consideración, en cuanto sea legalmente compatible con la estructura del ACP, los siguientes criterios operativos, inspirados en el NCPP:

A. El Fiscal Provincial ha de incluir en su denuncia formalizada o en un requerimiento fundamentado en el curso de la etapa de instrucción a las personas jurídicas involucradas en el hecho punible imputado, incorporando en lo procedente los datos y contenidos a que alude el artículo 91°.1 NCPP, necesarios para su identificación y el juicio de imputación correspondiente a cargo del Juez Penal.

B. La persona jurídica denunciada ha de ser comprendida en el auto de apertura de instrucción o en un auto ampliatorio o complementario en condición de sujeto pasivo imputado. En esta resolución, que deberá notificársele a la citada persona jurídica, el Juez Penal dispondrá que ella designe un apoderado judicial en iguales términos que los referidos en el artículo 92° NCPP.

C. La persona jurídica procesada tiene, en lo pertinente, los mismos derechos y garantías que la ley vigente concede a la persona del imputado durante la instrucción y el juicio oral.

D. La acusación fiscal, si correspondiere, debe pronunciarse

específicamente acerca de la responsabilidad de la persona jurídica. En su caso, solicitará motivadamente la aplicación específica de las consecuencias accesorias que corresponda aplicar a la persona jurídica por su vinculación con el hecho punible cometido. En todo caso, corresponderá al órgano jurisdiccional el control de la acusación fiscal en orden a la intervención en el juicio oral de la persona jurídica.

E. La persona jurídica deberá ser emplazada con el auto de enjuiciamiento, pero su inasistencia no impide la continuación del juicio oral. El Juez o Sala Penal competente, de ser el caso, impondrá la consecuencia accesoria que resulte pertinente al caso con la debida fundamentación o la absolverá de los cargos. Rige en estos casos el principio acusatorio y el principio de congruencia procesal o correlación.

III. DECISIÓN

23°. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, por unanimidad, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

ACORDARON:

24°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 11° al 22°.

25°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° del citado estatuto orgánico.

26°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase saber.

- Ley 30424 y su DL.1352 que lo modifica.

LEY N° 30424

LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional previsto en el artículo 397-A del Código Penal.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Para efectos de la presente Ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta.

El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización social, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma.

SECCIÓN II ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

Las personas jurídicas a que se hace referencia en el artículo 2 son responsables administrativamente por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal, cuando este haya sido cometido en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:

- a. Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.
- b. Las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren o de si media relación contractual y que, estando sometidas a la autoridad y control de los gestores y órganos mencionados en el literal anterior, actúan por orden o autorización de estos últimos.
- c. Las personas naturales señaladas en el literal precedente cuando, en atención a la situación concreta del caso, no se ejerza sobre ellas el debido control y vigilancia por parte de los administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales u órganos colegiados de la persona jurídica.

Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en los literales a, b y c del primer párrafo, hubiesen cometido el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y extinción de la acción contra la persona jurídica

La responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

La acción contra la persona jurídica se extingue por prescripción, cosa juzgada, amnistía o el derecho de gracia.

La prescripción de la acción contra la persona jurídica se rige por lo dispuesto, en lo que corresponda, en los artículos 80, 82, 83 y 84 del Código Penal.

SECCIÓN III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES
A LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 5. Medidas administrativas aplicables

El juez aplica, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resultaren administrativamente responsables de la comisión del delito de cohecho activo transnacional, tipificado en el artículo 397-A del Código Penal:

- a. Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el literal a del primer párrafo del artículo 7.
- b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades:
 1. Suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos años.
 2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será mayor de cinco años.
 3. Suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años.
- c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
- d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no mayor de cinco años.
- e. Disolución.

Artículo 6. Medidas administrativas complementarias

El juez puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica que resultare administrativamente responsable de la comisión del delito de cohecho activo transnacional, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un período de dos años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la intervención y determinar la entidad a cargo de la intervención y los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.

La intervención se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y disposición del Ministerio Público. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.

Artículo 7. Multa

Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión del delito de cohecho activo transnacional, el valor de la multa se establece conforme a los siguientes criterios:

- a. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende hasta ciento cincuenta unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez ni mayor de cincuenta unidades impositivas tributarias.
- b. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende hasta mil setecientas unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta ni mayor de doscientas cincuenta unidades impositivas tributarias.

c. Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende a un monto mayor a las mil setecientas unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de doscientas cincuenta ni mayor de quinientas unidades impositivas tributarias.

La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica y cuando el pago del monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe en cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses.

En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b del artículo 5.

Artículo 8. Inhabilitación

La medida de suspensión para contratar con el Estado, prevista en el numeral 3 del literal b del artículo 5, se impone de forma obligatoria en los casos en que el delito es cometido en el marco de un proceso de contratación pública.

El juez puede imponer cualquier modalidad de inhabilitación en supuestos distintos al señalado en el primer párrafo, en atención a las particularidades del caso concreto y considerando los criterios establecidos en el artículo 14.

Artículo 9. Cancelación de licencias u otras autorizaciones y clausura

La medida prevista en el literal c del artículo 5 se aplica de forma obligatoria cuando el delito de cohecho activo transnacional estuvo destinado o vinculado a la obtención de licencias u otras autorizaciones administrativas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, el juez puede imponer las medidas previstas en los literales c y d del artículo 5, en otros supuestos cuando lo estime pertinente en atención a los criterios establecidos en el artículo 14.

Artículo 10. Disolución

La disolución se aplica solo a las personas jurídicas que hayan sido constituidas y operado para favorecer, facilitar o encubrir la comisión del delito de cohecho activo transnacional. En ningún caso podrá aplicarse para otras circunstancias.

Esta medida no es aplicable cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado o sociedades de economía mixta que presten un servicio de utilidad pública, cuya interrupción pueda causar graves consecuencias sociales o económicas o daños serios a la comunidad.

Artículo 11. Decomiso

El juez, cuando corresponda, dispone el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito de cohecho activo transnacional por el que se declare responsable administrativamente a la persona jurídica, de conformidad con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las medidas administrativas del artículo 5 que resulten aplicables.

SECCIÓN IV

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

Artículo 12. Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes:

a. Haber procedido a través de sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados a confesar la comisión del delito de cohecho activo transnacional, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria.

b. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, en cualquier momento del proceso.

- c. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito.
- d. La reparación total o parcial del daño.
- e. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito de cohecho activo transnacional y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.
- f. La acreditación parcial de los elementos del modelo de prevención, previstos en el párrafo 17.2 del artículo 17.

Artículo 13. Circunstancias agravantes

Son circunstancias agravantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas:

- a. La comisión del delito de cohecho activo transnacional en virtud de cualquiera de los supuestos del artículo 3, dentro de los cinco años posteriores a la imposición, mediante sentencia firme, de una o más medidas del artículo 5 a la misma persona jurídica. En tal caso, el juez puede aumentar las medidas establecidas en los literales a, b y d del artículo 5, hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido.
- b. La utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión del delito de cohecho activo transnacional. Se entiende que se está ante este supuesto cuando la actividad legal sea menos relevante que su actividad ilegal.

Artículo 14. Criterios para la aplicación de las medidas administrativas

Las medidas administrativas previstas en los literales b, c y d del artículo 5 son determinadas por el juez en atención a los siguientes criterios, según corresponda:

- a. La gravedad del hecho punible.
- b. El tamaño y naturaleza de la persona jurídica.
- c. La capacidad económica de la persona jurídica.
- d. La extensión del daño o peligro causado.
- e. El beneficio económico obtenido por el delito de cohecho activo transnacional.
- f. La modalidad y la motivación de la utilización de la persona jurídica en el delito.
- g. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber de control.

Artículo 15. Individualización de las medidas administrativas

En caso de que el juez imponga la medida de multa o las medidas administrativas previstas en los literales b y d del artículo 5 con carácter temporal, debe desarrollar los siguientes pasos:

- a. Identifica la extensión de la medida que corresponda, según los límites establecidos en el artículo 5, y la divide en tres partes.
- b. Determina la medida concreta, evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, conforme a las siguientes reglas:
 1. Cuando concurren únicamente circunstancias atenuantes o no existan atenuantes ni agravantes, se aplica la medida dentro del tercio inferior.
 2. Cuando concurren circunstancias agravantes y atenuantes, se aplica la medida dentro del tercio intermedio.
 3. Cuando concurren únicamente circunstancias agravantes, se aplica la medida dentro del tercio superior.
 4. Cuando se trate de circunstancias atenuantes previstas por la ley como privilegiadas, se aplica la medida por debajo del tercio inferior.
 5. Cuando se trate de circunstancias agravantes previstas por la ley como cualificadas, se aplica la medida por encima del tercio superior.
 6. En caso de concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas, se aplica la medida dentro de los límites del rango legal.

Para efectos del presente artículo, son circunstancias atenuantes privilegiadas aquellas previstas en la ley penal o procesal penal que prevean la reducción de la pena por debajo del mínimo legal. Del mismo modo, son circunstancias agravantes cualificadas aquellas previstas en la ley penal o procesal penal que prescriban el incremento de la pena por encima del máximo legal.

Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las medidas administrativas

16.1. El juez puede, mediante resolución debidamente motivada y de modo excepcional, considerando especialmente el número de trabajadores o las ventas anuales netas o los montos de exportación de la persona jurídica, suspender la ejecución de las medidas administrativas impuestas y sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años. La suspensión procede siempre que la persona jurídica no esté incurso en el supuesto de reincidencia previsto en el literal a del artículo 13.

16.2. En el caso de empresas del Estado, sociedades de economía mixta o de personas jurídicas que prestan un servicio de utilidad pública cuya interrupción pueda causar graves consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, el juez puede ordenar la suspensión, cualquiera fuese la medida administrativa impuesta en la sentencia.

16.3. Si durante el periodo de suspensión no se dispone la incorporación formal de la persona jurídica al proceso penal de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, el juez deja sin efecto la medida administrativa impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa.

16.4. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.

SECCIÓN V

MODELO DE PREVENCIÓN

Artículo 17. Eximente por implementación de modelo de prevención

17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad administrativa por la comisión del delito de cohecho activo transnacional, si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito de cohecho activo transnacional o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

17.2. El modelo de prevención a que se hace referencia en el párrafo 17.1 debe contener como mínimo los siguientes elementos:

a. Una persona u órgano, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica, que ejerza la función de auditoría interna de prevención y que cuente con el personal, medios y facultades necesarios para cumplirla adecuadamente. Esta función se ejerce con la debida autonomía respecto del órgano de administración, sus propietarios, accionistas o socios, salvo en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, donde puede ser asumida directamente por el órgano de administración.

b. Medidas preventivas referidas a:

1. La identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que generen o incrementen riesgos de comisión del delito de cohecho activo transnacional.

2. El establecimiento de procesos específicos que permitan a las personas que intervengan en estos, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera que prevenga la comisión del delito de cohecho activo transnacional.

3. La identificación de los procesos de administración y auditoría de los recursos financieros que permitan a la persona jurídica prevenir su utilización en la comisión de la conducta delictiva de cohecho activo transnacional.

4. La existencia de sistemas de denuncia, protección del denunciante, persecución e imposición de sanciones internas en contra de los trabajadores o directivos que incumplan el modelo de prevención.

c. Un mecanismo de difusión y supervisión interna del modelo de prevención, el cual debe ser aprobado por un reglamento o similar emitido por la persona jurídica.

17.3. El reglamento desarrolla y precisa los elementos y requisitos necesarios para la implementación del modelo de prevención.

17.4. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

17.5. Se excluye también la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado atendiendo a los elementos previstos en el párrafo 17.2.

Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración

El fiscal o el juez, según corresponda, verifican la efectiva implementación y funcionamiento del modelo de prevención. Si en el curso de las diligencias preliminares se acredita la existencia de un modelo de

prevención implementado con anterioridad a la comisión del delito de cohecho activo transnacional, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante decisión debidamente motivada. En caso de que la investigación preparatoria se hubiese formalizado, el juez puede, a petición del Ministerio Público, dictar auto de sobreseimiento de conformidad con la normatividad procesal vigente.

Artículo 19. Certificación del modelo de prevención

El modelo de prevención puede ser certificado por terceros debidamente registrados y acreditados, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el párrafo 17.2 del artículo 17. El reglamento establece la entidad pública a cargo de la acreditación de terceros, la norma técnica de certificación y demás requisitos para la implementación adecuada de los modelos de prevención.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES**

PRIMERA. Vigencia

La presente norma entra en vigencia el 1 de julio de 2017.

SEGUNDA. Reglamento

El Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley, aprueba el reglamento a que hace referencia el párrafo 17.3 del artículo 17.

TERCERA. Vía procesal

La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957.

CUARTA. Normas aplicables

Durante la investigación y proceso penal, la persona jurídica goza de todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.

La persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo que resulte pertinente.

Asimismo, son aplicables los artículos 372 y 468 al 471 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, que regulan la conclusión anticipada del juicio y el proceso de terminación anticipada respectivamente, con plena intervención del apoderado judicial de la persona jurídica, y demás normas del citado código que resulten pertinentes.

QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas administrativamente

El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas administrativas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase de sanción y duración de la misma, así como el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción correspondiente, de ser el caso.

En caso de que las personas jurídicas cumplan con la medida administrativa impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carácter definitivo.

El Poder Judicial puede suscribir convenios con otras instituciones para compartir la información que conste en el registro.

El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Ley, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que regulen los procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios para su efectiva implementación.

SEXTA. Campañas de difusión

La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de su Coordinación General, realiza campañas de difusión sobre los alcances de la norma, dirigida a las empresas, a la policía, a los fiscales, a los procuradores, a los jueces y a los ciudadanos.

SÉTIMA. Financiamiento

La implementación de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

OCTAVA. Informe técnico de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Cualquier propuesta normativa que modifique la presente Ley o que implique la reducción o ampliación de su objeto y alcances, cuenta para su aprobación con un informe técnico no vinculante de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

En el supuesto de facultades delegadas a que se refiere el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, el sector responsable solicita el referido informe técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

NOVENA. Responsabilidad por denuncias maliciosas

La presentación de denuncias maliciosas en el marco de la presente Ley da lugar a responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria, conforme a ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA. Incorporación del artículo 401-C al Código Penal

Incorpórase el artículo 401-C al Código Penal con el texto siguiente:

“Artículo 401-C. Multa aplicable a las personas jurídicas

Cuando las personas jurídicas señaladas en el artículo 2 de la Ley que regula la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional resulten responsables por el delito previsto en el artículo 397-A, el juez impone la medida de multa, conforme al literal a del artículo 5 de la citada norma, sin perjuicio de las demás medidas administrativas allí previstas que resulten aplicables”.

SEGUNDA. Incorporación del artículo 313-A al Código Procesal Penal

Incorpórase el artículo 313-A al Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, con el texto siguiente:

“Artículo 313-A. Medidas cautelares en casos de responsabilidad administrativa autónoma de personas jurídicas

En los supuestos previstos en la Ley que regula la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, el juez, a pedido de parte legitimada, puede ordenar, además de las medidas establecidas en el numeral 1 del artículo 313, las siguientes:

- a. Prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas con cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el delito.
- b. Suspensión para contratar con el Estado.

La imposición de las medidas señaladas en el primer párrafo procede siempre que existan suficientes elementos probatorios sobre la responsabilidad administrativa de la persona jurídica por el delito de cohecho activo transnacional y que fuese indispensable para prevenir los riesgos de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida o para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad.

Estas medidas cautelares no duran más de la mitad del tiempo fijado para las medidas de carácter temporal previstas en el artículo 5 de la Ley que regula la responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional”.

DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1352

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas materias por un plazo de noventa (90) días calendario;

Que, las facultades otorgadas en materia de seguridad ciudadana se encuentran previstas en el numeral 2) del artículo 2 de la citada ley; y, dentro de este numeral, el literal i) faculta al Poder Ejecutivo para incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, respectivamente;

Que, el Perú ha ratificado los principales instrumentos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, tales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo; instrumentos que exigen al Perú regular la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sea en el ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que los hayan cometido;

Que, asimismo, conforme a las Recomendaciones tres (3) y cinco (5) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus respectivas notas interpretativas, los países, entre ellos, el Perú - que asumió el compromiso de cumplirlas en el año dos mil - deben asegurar que se aplique a las personas jurídicas involucradas en los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo responsabilidad penal, civil o administrativa; y, por su parte, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), exige legislar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su participación en el cohecho activo transnacional;

Que, mediante Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, se estableció la responsabilidad de las personas jurídicas pero únicamente para el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal;

Que, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias internacionales antes mencionadas, se hace necesario perfeccionar el marco normativo vigente y establecer un nuevo campo de responsabilidad administrativa que regule, además del delito de cohecho activo transnacional, la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas que participan en otros delitos de corrupción, tales como el delito de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, así como en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

De conformidad con lo establecido en el literal a) e i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE AMPLIA LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 1.- Modificación la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

“Artículo 1. Objeto de la ley

La presente Ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por los delitos previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

Para efectos de la presente Ley, son personas jurídicas las entidades de derecho privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano o sociedades de economía mixta.

El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización societaria, transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma.

En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente: (i) solo puede ser sancionada con el pago de una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas establecidas en los artículos 5 o 7, según corresponda, y en función al patrimonio transferido, siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o escisión, salvo que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado estas formas de reorganización societaria con el propósito de eludir una eventual responsabilidad administrativa de la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no opera este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusión o escisión. Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1.

Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas

Las personas jurídicas son responsables administrativamente por los delitos señalados en el artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, por:

- a. Sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.
- b. La persona natural que, estando sometida a la autoridad y control de las personas mencionadas en el literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes o autorización.
- c. La persona natural señalada en el literal precedente, cuando la comisión del delito haya sido posible porque las personas mencionadas en el literal a. han incumplido sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada, en atención a la situación concreta del caso.

Las personas jurídicas que tengan la calidad de matrices serán responsables y sancionadas siempre que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes, autorización o con su consentimiento.

Las personas jurídicas no son responsables en los casos en que las personas naturales indicadas en el primer párrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor de un tercero distinto a la persona jurídica.

Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica y extinción de la acción contra la persona jurídica

La responsabilidad administrativa de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la persona natural. Las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural no enervan la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas.

La acción contra la persona jurídica se extingue por prescripción o cosa juzgada.

La acción contra la persona jurídica prescribe en el mismo tiempo que el previsto para la persona natural, de conformidad con el primer párrafo del artículo 80 del Código Penal, siendo de aplicación asimismo, en lo que corresponda, los artículos 82, 83 y 84 del Código Penal.

Artículo 5. Medidas administrativas aplicables

El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer, según corresponda, las siguientes medidas administrativas contra las personas jurídicas que resulten responsables de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1:

- a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo del beneficio obtenido o que se espera obtener con la comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.
- b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades:
 - 1. Suspensión de sus actividades sociales por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.
 - 2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición temporal no será menor de un año ni mayor de cinco años.
 - 3. Para contratar con el Estado de carácter definitivo.
- c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.
- d. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no menor de un año ni mayor de cinco años.
- e. Disolución.

Artículo 6. Medidas administrativas complementarias

El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un período de dos años.

La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la intervención y determinar la entidad a cargo de la intervención y los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.

La intervención se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y disposición del Ministerio Público. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.

Artículo 7. Multa

Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, el valor de la multa se establece conforme a los siguientes criterios:

- a) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito asciende hasta ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) unidades impositivas tributarias.
- b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a ciento cincuenta (150) unidades impositivas tributarias y menor de mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de cincuenta (50) ni mayor de quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT).
- c) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al momento de la comisión del delito sea mayor a mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la multa es no menor de quinientas (500) ni mayor a diez mil (10000) unidades impositivas tributarias (UIT).

La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona jurídica y cuando el pago del monto de la multa pueda poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable por el interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe en cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses.

En caso de que la persona jurídica no cumpla con el pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la medida de prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b) del artículo 5.

Artículo 11. Decomiso

El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede disponer el decomiso de los instrumentos, objetos, efectos y ganancias del delito cometido por el que se declare responsable a la persona jurídica, de conformidad con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con las medidas del artículo 5 que resulten aplicables.

Artículo 12. Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas las siguientes:

- a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho delictivo, hasta antes del inicio de la etapa intermedia.
- b. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito.
- c. La reparación total o parcial del daño.
- d. La adopción e implementación por parte de la persona jurídica, después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención.
- e. La acreditación parcial de los elementos mínimos del modelo de prevención.

La confesión, debidamente corroborada, de la comisión del delito, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria, tiene como efecto que el juez pueda rebajar la medida establecida en los literales a), b), y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos en atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso o cuando se haya configurado la reincidencia de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13.

Artículo 13. Circunstancias agravantes

Constituye circunstancia agravante la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de

cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo 1. Este supuesto se configura cuando se pruebe que la actividad que desarrolla la persona jurídica es predominantemente ilícita.

Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando la persona jurídica contiene dentro de su estructura un órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya finalidad o actividad es ilícita.

La comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo 1, dentro de los cinco años posteriores a la fecha en que se le haya impuesto, mediante sentencia firme, una o más medidas, tiene como efecto que el juez pueda aumentar las medidas establecidas en los literales a), b) y d) del artículo 5, hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido.

Artículo 14. Criterios para la aplicación de las medidas administrativas

Las medidas previstas en los literales b, c y d del artículo 5 son determinadas por el juez en atención a los siguientes criterios, según corresponda:

- a. La gravedad del hecho punible.
- b. La capacidad económica de la persona jurídica.
- c. La extensión del daño o peligro causado.
- d. El beneficio económico obtenido por el delito.
- e. El móvil para la comisión del delito.
- f. El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber de control.

Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las medidas

16.1. El juez puede disponer mediante resolución debidamente motivada y de modo excepcional, la suspensión de la ejecución de las medidas impuestas y sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre que la medida a imponerse esté por debajo del tercio inferior conforme a lo establecido en el artículo 15, y no se refiera a la prevista en el primer párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 9 o en el artículo 10.

16.2. El juez al ordenar la suspensión de la ejecución de la medida impuesta y sus efectos impone a la persona jurídica las siguientes reglas: (i) la reparación total del daño y (ii) la obligación de adoptar e implementar un modelo de prevención.

16.3. Si durante el periodo de suspensión la persona jurídica no cumple con las reglas impuestas, el Juez puede, según sea el caso: (i) prorrogar el periodo de suspensión hasta la mitad del plazo fijado; en ningún caso la prórroga acumulada debe exceder los dos años, o (ii) revocar la suspensión decretada.

16.4. Si transcorre el periodo de suspensión sin que la persona jurídica sea incorporada a un nuevo proceso penal de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga el nuevo Código Procesal Penal, y se verifica el cumplimiento de las reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sanción impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa.

16.5. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.

Artículo 17. Eximente por implementación de modelo de prevención

17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en el artículo 1, si adopta e implementa en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.

17.2. El modelo de prevención debe de contar con los siguientes elementos mínimos:

17.2.1. Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía. Tratándose de las micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado de prevención puede ser asumido directamente por el órgano de administración.

17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de los delitos previstos en el artículo 1 a través de la persona jurídica.

17.2.3. Implementación de procedimientos de denuncia.

17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención.

17.2.5. Evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención.

El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en el Reglamento de la presente Ley. En caso de la micro, pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será acotado a su naturaleza y características y solo debe contar con alguno de los elementos mínimos antes señalados.

17.3. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, el modelo de prevención se ejerce sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.

17.4. Se excluye también la responsabilidad de la persona jurídica, cuando cualquiera de las personas naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención debidamente implementado.

Artículo 18. Efectos jurídicos y valoración

El fiscal para formalizar la investigación preparatoria debe contar con un informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que analice la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, que tiene valor probatorio de pericia institucional.

Si el informe técnico de la SMV establece que la implementación y funcionamiento del modelo de prevención antes de la comisión del delito, es adecuado, el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante decisión debidamente motivada.”

Artículo 2.- Modificación de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional

Modifícase la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:

“PRIMERA. Vigencia

La presente norma entra en vigencia el 1 de enero del 2018.

SEGUNDA. Reglamento

El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90) hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia el numeral 17.2 del artículo 17, a propuesta del Ministerio de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos.

TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de artículos del Código Procesal Penal

La investigación, procesamiento y sanción de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el marco del proceso penal, al amparo de las normas y disposiciones del Decreto Legislativo N° 957, gozando la persona jurídica de todos los derechos y garantías que la Constitución Política del Perú y la normatividad vigente reconoce a favor del imputado.

Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto Legislativo N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde no se encuentre vigente.

CUARTA. Defensa Pública

La persona jurídica puede ser asistida por la defensa pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo que resulte pertinente.

QUINTA. Registro de personas jurídicas sancionadas

El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la inscripción de las medidas impuestas a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre, clase de medida y duración de la misma, así como el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción correspondiente, de ser el caso.

En caso de que las personas jurídicas cumplan con la medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga carácter definitivo.

El Poder Judicial puede suscribir convenios con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otras instituciones, para compartir la información que conste en el registro.

El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que regulen los procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del registro y demás aspectos necesarios para su efectiva implementación.

OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV

Dispóngase que la SMV está facultada para emitir el informe técnico con calidad de pericia institucional, y que constituye un requisito de procedibilidad para la formalización de la investigación preparatoria por los delitos contenidos en el artículo 1 de la presente norma.

El informe que analiza la implementación y funcionamiento de los modelos de prevención debe ser emitido dentro de los 30 días hábiles desde la recepción del pedido fiscal que lo requiera.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación

Deróganse el artículo 19, la Sexta Disposición Complementaria Final y la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.

PARTE IV: LEGISLACION COMPARADA

ESTADOS UNIDOS

Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, 1977

Sección 78dd-1 [Sección 30A de la Ley de Valores y Bolsa de 1934].

Prácticas prohibidas de comercio exterior por parte de los emisores

a) Prohibición. Será ilícito que cualquier emisor que tenga una clase de valores registrados conforme a la sección 78l del presente título o que deba presentar informes en virtud de la sección 78o(d) del presente título, o que cualquier funcionario, director, empleado o agente de dicho emisor, o cualquier accionista de dicho emisor que actúe en su nombre, utilice el correo o cualquier medio o instrumento de comercio interestatal en forma corrupta a fin de promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a:

1) cualquier funcionario extranjero con el fin de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero que actúe a título oficial, ii) inducir a dicho funcionario extranjero a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo, o
iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero a que influya en un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, o influir en él, con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener algún negocio para alguna persona, o con ella, o para encaminar algún negocio hacia alguna persona;

2) cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido o cualquier candidato a un cargo político extranjero con el propósito de:

A) i) influir sobre cualquier acto o decisión de dicho partido, funcionario o candidato que actúe a título oficial; ii) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a realizar u omitir un acto en infracción del deber legítimo de dicho partido, funcionario o candidato; o iii) obtener cualquier ventaja indebida; o

B) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a que influya en un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, o influir en él, con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar negocios hacia ella; o

3) cualquier persona, a sabiendas que todo el dinero o parte del mismo o artículo de valor se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido, o a cualquier candidato a un cargo político extranjero, con el propósito de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato; (ii) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato a realizar u omitir cualquier acto en infracción de los deberes legítimos de dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato; o (iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato a utilizar su influencia ante un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicho

emisor a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar negocios hacia ella.

g) Jurisdicción alternativa

1) También será ilícito que un emisor constituido en virtud de las leyes de los Estados Unidos, o de un estado, territorio, posesión o Estado asociado de los Estados Unidos, o de una subdivisión política de los mismos y que tiene una clase de valores registrados conforme a la sección 12 del presente título, o que debe presentar informes en virtud de la sección 15 d) del presente título, o que cualquier persona de los Estados Unidos que sea funcionario, director, empleado o agente de dicho emisor o accionista del mismo que actúe en nombre de dicho emisor, realice en forma corrupta cualquier acto fuera de los Estados Unidos en apoyo de una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de cualquier dinero, u oferta, donación, promesa de donar o autorización de dar algo de valor a cualquiera de las personas o entidades según lo estipulado en los párrafos 1), 2) y 3) de esta subsección a) de esta sección para los fines expuestos en la misma, independientemente de si dicho emisor o dicho funcionario, director, empleado, agente o accionista hace uso de la correspondencia y otros medios o instrumentos de comercio interestatal en apoyo de dicha oferta, donación, pago, promesa o autorización.

2) Según se emplea en esta subsección, la expresión “persona de los Estados Unidos” significa un nacional de los Estados Unidos (como se define en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Sección 1101, Título 8, Código de los EE. UU.) o cualquier empresa, sociedad, asociación, sociedad anónima, fondo de inversiones, organización no constituida o sociedad unipersonal constituida en virtud de las leyes de los Estados Unidos o de un estado, territorio, posesión o Estado asociado de los Estados Unidos, o de una subdivisión política de los mismos.

Sección 78dd-2. Prácticas comerciales extranjeras prohibidas para empresas nacionales

a) Prohibición. Será ilícito que cualquier empresa nacional, que no sea un emisor que está sujeto a la sección 78dd-1 del presente título, o que todo funcionario, director, empleado o agente de dicha empresa nacional o accionista de la misma que actúe en nombre de dicha empresa nacional, utilice en forma corrupta la correspondencia u otros

medios o instrumentos de comercio interestatal para fomentar una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de cualquier dinero, ofrecimiento donación, promesa de donación o autorización de dar cualquier cosa de valor a:

1) cualquier funcionario extranjero para fines de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero que actúe a título oficial, ii) inducir a dicho funcionario extranjero a realizar u omitir cualquier acto en infracción de su deber legítimo de funcionario, o iii) obtener cualquier ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero a usar su influencia con un gobierno extranjero o instrumento del mismo con el fin de afectar o influir en cualquier acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicha empresa nacional a obtener o retener negocios para cualquier persona o con ella, o encaminar negocios a la misma;

2) cualquier partido político extranjero o funcionario del mismo o cualquier candidato a un puesto político extranjero con el objeto de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho partido, funcionario o candidato que actúe a título oficial;

ii) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a realizar u omitir un acto en infracción de su deber

legítimo de funcionario de dicho partido, funcionario o candidato; o iii) obtener cualquier ventaja indebida; o

B) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a influir en un gobierno extranjero o instrumento del mismo a afectar o influir en cualquier acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicha empresa nacional a obtener o retener negocios para cualquier persona o con ella, o encaminar negocios a la misma;

3) cualquier persona, a sabiendas de que todo ese dinero o cosa de valor, o parte del mismo, se ofrecerá, dará o prometerá, directa o indirectamente a cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido

político extranjero o funcionario del mismo, o a cualquier candidato a cargo político extranjero, para fines de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero, partido político, autoridad del partido o candidato que actúe a título oficial; ii) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político, autoridad del partido o candidato a realizar u omitir un acto en infracción de su deber legítimo de funcionario extranjero, partido político, autoridad del partido o candidato; o iii) obtener cualquier ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político, autoridad del partido o candidato a influir en un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar o influir en cualquier acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicha empresa nacional a obtener o retener negocios para cualquier persona o con ella, o encaminar negocios a la misma.

g) Sanciones

1) A) Toda empresa nacional que no sea una persona natural y que infrinja la subsección a) o i) de esta sección será multada con un máximo de \$2.000.000.

B) Toda empresa nacional que no sea una persona natural y que infrinja la subsección a) o i) de esta sección estará sujeta a una sanción civil de un máximo de \$10.000, la cual será impuesta mediante una acción entablada por el Secretario de Justicia.

h) Definiciones

Para los fines de esta sección:

1) El término "empresa nacional " significa:

A) cualquier persona que sea ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos; y

B) cualquier empresa, sociedad, asociación, sociedad anónima, fondo de fideicomiso, organización no constituida o sociedad unipersonal que tiene su lugar principal de negocios en los Estados Unidos, o que está constituido en virtud de las leyes de los Estados Unidos o de un territorio, posesión o estado asociado de los Estados Unidos.

i) Jurisdicción alternativa

1) También será ilícito que una persona de los Estados Unidos realice en forma corrupta cualquier acto fuera de los Estados Unidos en apoyo de una oferta, pago, promesa de pago o autorización de pago de cualquier dinero, u oferta, donación, promesa de donar o autorización de dar algo de valor a cualquiera de las personas o entidades según los estipulado en los párrafos 1), 2) y 3) de la subsección a), para los fines expuestos en la misma, independientemente de si dicha persona de los Estados Unidos hace uso de la correspondencia y otros medios o instrumentos de comercio interestatal en apoyo de dicha oferta, donación, pago, promesa o autorización.

2) Según se emplea en esta subsección, el término “persona de los Estados Unidos” significa un nacional de los Estados Unidos (como se define en la sección 101 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad

(Sección 1101, Título 8, Código de los EE. UU.)) o cualquier empresa, sociedad, asociación, sociedad anónima, fondo de inversiones, organización no constituida o sociedad unipersonal constituida en virtud de las leyes de los Estados Unidos o de un estado, territorio, posesión o Estado asociado de los Estados Unidos, o de una subdivisión política de los mismos.

Sección 78dd-3. Prácticas prohibidas de comercio exterior por parte de personas que no sean los emisores o las empresas nacionales

a) Prohibición. Será ilícito que cualquier persona que no sea un emisor que esté sujeta a la sección 30A de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 o una empresa nacional, según se define en la sección 104 de esta Ley, o que cualquier funcionario, director, empleado o agente de dicha persona, o cualquier accionista de dicha persona que actúe en nombre de dicha persona, mientras se encuentre en el territorio de los Estados Unidos, utilice el correo o cualquier medio o instrumento de comercio interestatal en forma corrupta o realice algún otro acto para promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor a:

1) cualquier funcionario extranjero con el fin de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero que actúe a título oficial, ii) inducir a dicho funcionario extranjero a que realice u omita algún acto en infracción de su deber legítimo de, o iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero a que influya en con un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, o influir en él, con el fin de ayudar a dicha persona a obtener o retener algún negocio para alguna persona, o con ella, o para encaminar algún negocio hacia alguna persona;

2) cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido o cualquier candidato a un cargo político extranjero con el propósito de:

A) i) influir sobre cualquier acto o decisión de dicho partido, funcionario o candidato que actúe a título oficial; ii) inducir a dicho partido, funcionario o candidato a realizar u omitir un acto en infracción del deber legítimo de dicho partido, funcionario o candidato; o iii) obtener cualquier ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato a que influya en un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicha persona a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar negocios hacia ella.

3) cualquier persona, a sabiendas de que todo el dinero o parte del mismo o artículo de valor se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario extranjero, a cualquier partido político extranjero o funcionario de ese partido, o a cualquier candidato a un cargo político extranjero, con el propósito de:

A) i) influir en cualquier acto o decisión de dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato que actúe a título oficial; ii) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato a realizar u omitir cualquier acto en infracción de los deberes legítimos de dicho funcionario extranjero, partido político extranjero,

funcionario de ese partido o candidato; o iii) obtener alguna ventaja indebida; o

B) inducir a dicho funcionario extranjero, partido político extranjero, funcionario de ese partido o candidato a utilizar su influencia ante un gobierno extranjero o instrumento del mismo para afectar un acto

o decisión de dicho gobierno o instrumento, con el fin de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar negocios hacia ella.

e) Sanciones

1) A) Toda persona jurídica que infrinja la subsección a) de esta sección será multada con un máximo de \$2.000.000.

B) Toda persona jurídica que infrinja la subsección a) de esta sección estará sujeta a una pena civil de un máximo de \$10.000, la cual será impuesta mediante una acción entablada por el Secretario de Justicia.

2) A) Toda persona natural que infrinja intencionalmente la subsección a) de esta sección recibirá una multa de un máximo de \$100.000 o pena de prisión máxima de cinco años, o ambas.

B) Toda persona natural que infrinja la subsección a) de esta sección estará sujeta a una pena civil máxima de \$10.000, la cual será impuesta mediante una acción entablada por el Secretario de Justicia.

3) Cuando se imponga una multa en virtud del párrafo 2) a cualquier funcionario, director, empleado, agente o accionista de una persona, dicha multa no podrá ser pagada, directa o indirectamente, por dicha persona.

f) Definiciones

Para los fines de esta sección:

1) El término “persona”, cuando se refiere a un delincuente, significa cualquier persona natural que no sea un nacional de los Estados Unidos (según se define en la sección 1101, Título 8, Código de los EE. UU.) o cualquier empresa, sociedad, asociación, sociedad anónima,

fondo de inversiones, organización no constituida o sociedad unipersonal que está constituida en virtud de las leyes de una nación extranjera o una subdivisión política de la misma.

COLOMBIA

Ley 1474 de 2011

Artículo 34 – Medidas Contra Personas Jurídicas. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente.

En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las entidades estatales posiblemente perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan participado en la comisión de aquellas.

De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando con el consentimiento de su representante legal o de alguno de sus administradores o con la tolerancia de los mismos, la sociedad haya participado en la comisión de un delito contra la Administración Pública o contra el patrimonio público.

Código de Procedimiento Penal

Artículo 91 – Suspensión y Cancelación de la Personería Jurídica. En cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas.

Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que las originaron.

NICARAGUA

Código Penal

Artículo 113. Consecuencias accesorias que recaen sobre la persona jurídica Cuando el hecho delictivo se cometa en el ámbito de una persona jurídica o en beneficio de ella, el Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente y cuando en el caso concreto resulten necesarias, una o varias de las siguientes consecuencias accesorias:

- a) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años;
- b) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años;
- c) Disolución de la sociedad, asociación o fundación;
- d) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años;
- e) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquéllos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.

La clausura temporal prevista en el literal b) y la suspensión señalada en el literal d) del párrafo anterior, podrán ser acordadas por el Juez también durante la tramitación de la causa. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas en su imposición y cumplimiento a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.

PANAMA

Código Penal

Artículo 51. Cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualesquiera de las siguientes sanciones:

1. Cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años.
2. Multa no inferior a cinco mil balboas (B/.5,000.00) ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial.
3. Pérdida total o parcial de los beneficios fiscales.
4. Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término no superior a cinco años, la cual será impuesta junto con cualquiera de las anteriores.
5. Disolución de la sociedad.

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS

Gráfica 1:

Monto en los informes de inteligencia financiera por delito precedente

Posible delito vinculado	12 meses: ene. 2017 a dic. 2017	
	Nº de IIF	Total millones US\$
Tráfico ilícito de drogas	4	61
Minería ilegal	7	92
Delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito)	21	141
Defraudación tributaria	8	227
Defraudación de rentas de aduanas/contrabando	6	20
Delitos contra el orden financiero y monetario	1	3
Estafa/fraude	-	-
Delitos contra el patrimonio	2	3
Proxenetismo	-	-
Financiamiento del terrorismo	1	1
Trata de personas	-	-
Otros	7	104

Fuente: UIF

Gráfica 2:



RESULTADOS:

RESULTADO N°1:

Los delitos relacionados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como por ejemplo el de corrupción de funcionarios tiene como monto 141 millones de dólares, así mismo se cuentan en millones de dólares otros delitos relacionados a personas jurídicas o empresas como el defraudación tributaria entre otros. Claramente podemos notar que estamos ante un problema muy grande de acuerdo con la cifras de la estadística, que presentamos en la Gráfica 1, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), la cual abarca desde enero 2017- diciembre del 2017.

RESULTADO N°2:

Las empresas manejan cantidades muy grandes de dinero; y cabe señalar que son muchas en las que existe sospecha de lavado de activos. Son ingentes cantidades de dinero como ya hemos mencionado que se registran, en muchas operaciones consideradas como sospechosas según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los últimos 10 años, de acuerdo con la Grafica 2.

RESULTADO N°3:

Desde hace mucho se tiene muy presente, incluso históricamente se le ha dado mucha importancia al principio legal “societas delinquere non potest”, que significa la sociedad o empresa que delinque no es responsable. No está de más decir que en nuestro país, el Perú también se le dio una gran importancia a este principio. Y la inacción del legislador durante las pasadas décadas para crear, al menos, una ley referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú confirma completamente lo antes mencionado.

RESULTADO N°4:

Como hemos analizado cabal y concienzudamente, son muchas las teorías referidas a la culpabilidad de la persona jurídica, las cuales pretenden demostrar desde diversos ángulos diferentes, qué tan responsable es una empresa o sociedad con respecto a un ilícito penal. Y a su vez le permitirán a los legisladores de los diferentes países donde se comience a regular legalmente el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, poder concretar dichas leyes, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro.

RESULTADO N° 5:

Los artículos 105 y artículo 105-A del Código Penal se han referido durante muchos años y en cierto sentido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Señalamos esto porque, el art. 105 del Cód. Penal está referido a las Medidas Aplicables a las Personas Jurídicas por algún hecho punible cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica. Y el 105-A esta referido a los Criterios para la Determinación de las consecuencias aplicables.

RESULTADO N° 6:

En el Acuerdo Plenario N° 7-2009 / cj-116 de la Corte Suprema de Justicia, respecto al artículo 105 y el 105-A del Código Penal se hablaba de penas, es decir que en cierto sentido se comenzó a tratar al menos hasta cierto punto la idea de penalizar el accionar delictivo de una persona jurídica, sin embargo se volvió a resaltar el papel accesorio de dichos artículos del Código Penal.

RESULTADO N° 7:

La ley 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” es una ley nueva que se proyecta como el inicio de la regulación de los actos ilícitos de las empresas en nuestro país.

RESULTADO N° 8:

El problema de la comisión de actos ilícitos por parte de las empresas o sociedades en detrimento de la economía del Estado, no es un problema exclusivamente del Perú. Este es un problema internacional. Es por eso justamente que con el devenir del tiempo muchos países, como Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Panamá, entre otros han regulado este tema. Esto demuestra que el problema en cuestión es creciente, y produce un impacto negativo en la economía de los Estados.

CAPITULO IV: CONTRASTACION DE HIPOTESIS

I. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Discusión sobre el resultado N° 1:

Los delitos relacionados a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como por ejemplo el de corrupción de funcionarios tiene como monto 141 millones de dólares, así mismo se cuentan en millones de dólares otros delitos relacionados a personas jurídicas o empresas como el defraudación tributaria entre otros. Claramente podemos notar que estamos ante un problema muy grande de acuerdo con la cifras de la estadística, que presentamos en la Gráfica 1, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), la cual abarca desde enero 2017- diciembre del 2017.

De acuerdo con la gráfica N° 1 podemos notar que las pérdidas económicas que podrían producirse para el Estado por los delitos en que incurren las empresas se contabilizan en “millones”, así que de esta manera es como adquiere una gran relevancia el asunto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país.

Discusión sobre el resultado N° 2:

Las empresas manejan cantidades muy grandes de dinero; y cabe señalar que son muchas en las que existe sospecha de lavado de activos. Son ingentes cantidades de dinero como ya hemos mencionado que se registran, en muchas operaciones consideradas como sospechosas según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en los últimos 10 años, de acuerdo con la Grafica 2.

Las cifras que se registran en los últimos 10 años nos permiten darnos cuenta como los delitos en los que puede estar inmerso alguna empresa de nuestro país han ido en aumento, como se reporta claramente en el grafico 2 de operaciones sospechosas registradas por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

Discusión sobre el resultado N° 3:

Desde hace mucho se tiene muy presente, incluso históricamente se le ha dado mucha importancia al principio legal “societas delinquere non potest”, que significa la sociedad o empresa que delinque no es responsable. No está de más decir que en nuestro país, el Perú también se le dio una gran importancia a este principio. Y la inacción del legislador durante las pasadas décadas para crear, al menos, una ley referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú confirma completamente lo antes mencionado.

Considero que esto ya no es así. Es decir el principio legal “societas delinquere non potest” ha quedado obsoleto y mas bien debería llamarse “societas delinquere potest”, puesto que si existe responsabilidad de las empresas ante algún acto ilícito de su parte. Y además hay una tendencia mundial a considerar la responsabilidad penal de las personas jurídicas como parte importante de las legislaciones en varios países.

Discusión sobre el resultado N° 4

Como hemos analizado cabal y concienzudamente, son muchas las teorías referidas a la culpabilidad de la persona jurídica, las cuales pretenden demostrar desde diversos ángulos diferentes, que tan responsable es una empresa o sociedad con respecto a un ilícito penal. Y a su vez le permitirán a los legisladores de los diferentes países donde se comience a regular legalmente el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, poder concretar dichas leyes, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, incluido el nuestro.

Soy de la opinión, de que estas teorías si demuestran que es totalmente posible el que una empresa sea responsable penalmente por algún acto ilícito. Y como se puede apreciar en la presente investigación son muchas las teorías que confirman nuestro punto de vista. Así mismo es de importancia destacar que estas teorías son las que podrían ayudar a estudiar y regular mejor en nuestro país el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por qué no decirlo, también ayudarían si fueran tomadas en cuenta, en otros países.

Discusión sobre el resultado N° 5

Los artículos 105 y artículo 105-A del Código Penal se han referido durante muchos años y en cierto sentido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Señalamos esto porque, el art. 105 del Cód. Penal está referido a las Medidas Aplicables a las Personas Jurídicas por algún hecho punible cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica. Y el 105-A esta referido a los Criterios para la Determinación de las consecuencias aplicables.

Tengo que decir que los dos artículos el 105 y el 105-A del código penal son sólo consecuencias accesorias. Es decir que solo serán aplicables si tenemos lo principal, si existe lo principal, esto es por ejemplo cuando en un proceso judicial si existe la responsabilidad penal de una persona natural, por lo tanto se podrá aplicar estas consecuencias accesorias. Caso contrario, no serán tomados en cuenta estos artículos ni a lo que su contenido refiere. De acuerdo con algunos especialistas, estos artículos casi no son tenidos en cuenta por los jueces del país.

Discusión sobre el resultado N° 6

En el Acuerdo Plenario N° 7-2009 / cj-116 de la Corte Suprema de Justicia, respecto al artículo 105 y el 105-A del Código Penal se hablaba de penas, es decir que en cierto sentido se comenzó a tratar al menos hasta cierto punto la idea de penalizar el accionar delictivo de una persona jurídica, sin embargo se volvió a resaltar el papel accesorio de dichos artículos del Código Penal.

Este acuerdo plenario N° 7-2009 de la corte suprema de justicia, sirvió únicamente como un “comenzar a tratar el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas” con mayor seriedad, digámoslo así. Porque no aportó mucho a la legislación del tema en cuestión, a nuestro país. Incluso aunque se habla de “penas” no se dieron concretamente. Por lo que puedo decir que, esto sirvió poco o nada al avance de nuestro país en lo concerniente a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú.

Discusión sobre el resultado N° 7:

La ley 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” es una ley nueva que se proyecta como el inicio de la regulación de los actos ilícitos de las empresas en nuestro país.

Aunque se está comenzando a tratar el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú. Y lo señalamos así, porque podemos notar que este proceso se tramita ante juez penal, se actúa de acuerdo al código penal, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos hoy ante una ley penal que regula la responsabilidad de las personas jurídicas, como nunca antes había sucedido en el Perú.

Discusión sobre el resultado N° 8

El problema de la comisión de actos ilícitos por parte de las empresas o sociedades en detrimento de la economía del Estado, no es un problema exclusivamente del Perú. Este es un problema internacional. Es por eso justamente que con el devenir del tiempo muchos países, como Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, Panamá, entre otros. Esto demuestra que el problema en cuestión es creciente, y produce un impacto negativo en la economía de los Estados.

No puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar mi disconformidad con la demora de la regulación penal de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Perú, y aun cuando ya se viene haciendo los cambios para corregir esto, todavía queda mucho por hacer. No es solo cuestión de copiar la manera como se viene regulando este tema en otros países, sino de darle a las nuevas leyes referidas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, algunos matices propios a nuestra realidad nacional. Y además se debe tener en cuenta la urgencia que esto amerita, para realizar los cambios necesarios en nuestra regulación.

II. CONCLUSIONES.

1. Es muy importante que se regule la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, y no solo que se regule así porque si, sino una adecuada regulación legal al respecto. Teniendo en cuenta cuales son los delitos en los que incurren las personas jurídicas y el aumento de estos delitos no sólo en el Perú sino en Latinoamérica y el mundo.

2. Desde hace mucho tiempo se ha creído en el principio legal “societas delinquere non potest” (la sociedad o empresa no es responsable), como la única y gran verdad. Con el transcurrir del tiempo esto ha sido muy cuestionado, y finalmente se ha considerado en varios países latinos y del mundo este tema. Incluso en nuestro país se está comenzando a tomar en cuenta este tema con la Ley 30424 y su DL. 1352.

3. Países como Estados Unidos, Colombia, Nicaragua entre otros le dan mucha importancia a este tema y lo han demostrado al implementar en sus respectivas legislaciones aunque de maneras distintas, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

4. La nueva ley 30424 y su DL. 1352, es insuficiente, puedo decir de que aún existe una deuda pendiente en nuestro país con respecto al tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

III. RECOMENDACIONES.

1. Debe dársele cada vez más importancia al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, puesto que la impunidad de los delitos cometidos por éstas acarrea graves consecuencias económicas en detrimento del Estado. Es por eso que si se toman las medidas pertinentes, no sólo en prevención sino también en castigar los delitos en que incurran las empresas se podrá contribuir a una mejora que será notable en el devenir del tiempo.
2. El que se comience a tomar en cuenta en Perú este tema, el de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, es algo bueno. Pero que no debe de quedar ahí simplemente, debe de realizarse más estudios e investigaciones, referidas al tema. Es decir, esto es solo un comienzo en lo que concierne a la investigación de este tema, mas no debe ser el final.
3. En el Perú debe de dársele la misma trascendencia que se le ha dado a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en otros países. Dado que el mundo entero poco a poco está notando la importancia del tema en cuestión, debe ser así también aquí en nuestro país. De esa manera se podrá lograr una mejor regulación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y de esa manera tener como objetivo la disminución de los delitos en que incurren las empresas o en todo caso, no dejar impune sus actos ilícitos.

4. No es del todo buena la regulación normativa nueva. Creo que debería cambiarse la denominación de “Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas” a “Responsabilidad penal de las personas jurídicas” siendo de esta manera más claro el asunto para las empresas. La Ley 30424 no es una ley administrativa sino penal, se lleva a cabo ante un juez penal, tiene implicancias con leyes penales, por lo tanto debería cambiarse la denominación.

Es importante señalar que falta regular más delitos como el de peculado. Es muy raro que no se haya regulado este delito en particular, ni tenido en cuenta, incluso luego de haberse modificado la Ley 30424. Si se tuviera en cuenta este delito a futuro, permitiría tener una legislación más completa, referida a la Responsabilidad de las Personas Jurídicas.

Así mismo, tengo que recomendar la derogatoria o en todo caso modificatoria de los artículos 105 y 105-A del Código Penal, puesto que al tratarse de una consecuencia accesoria deviene necesariamente de algo principal. El código penal vigente no ha tenido en cuenta que va a pasar cuando NO haya una persona natural en el proceso y sólo haya persona jurídica. Es decir, que cuando en un determinado caso, se produzca la extinción de la responsabilidad penal de la persona natural. ¿Qué pasaría con la persona jurídica? Al ser una norma accesoria, de no haber responsabilidad penal de la persona natural, no pasara nada con la persona jurídica.

Finalmente tengo que decir que estas recomendaciones y cambios que en la presente tesis sugiero, deberían de darse lo más rápido posible para beneficio del país y así evitar la impunidad en las situaciones ya antes mencionadas.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- ABANTO VASQUEZ, Manuel, “*Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal*”. Volumen I. Lima 2004.
- BACIGALUPO SAGGESE, S: *La Responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Editorial Bosch, Casa Editorial, SA. 1998.
- BRICOLA, F. *prólogo al libro El proceso despenalizador. PERIS RIERA, J. Colección de Estudios*. Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal. Universidad de Valencia. 1983.
- BACIGALUPO, Silvina. *La responsabilidad penal de la persona jurídica*, Madrid 2004.
- BUSTOS RAMIREZ, Juan. “*Obras completas*” Tomo I. Ara Editores. Lima 2004.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo “*Diccionario Jurídico Elemental*” Editorial Heliasta. Lima Perú 2000.
- CUELLO CONTRERAS, J. *El Derecho penal Español. Parte General*. Dykinson, Madrid. 2002.

- CARBONELL MATEU, JC: *Responsabilidad Penal de las personas jurídicas: Reflexiones en torno a su dogmática y al sistema de la reforma de 2010*. Cuadernos de Política Criminal. N° 101. Pág. 7-12. , 2010.
- CARNELUTTI FRANCESCO, *Teoría General del Delito* (1852), Editorial Reus. 2007.
- DE ÁNGEL YAGÜEZ. *La doctrina del "levantamiento del velo" de la persona jurídica en la reciente jurisprudencia*, Madrid, 1990.
- DE LA CUESTA ARZAMENDI, JOSÉ LUÍS, *Una "Nueva" Línea De Intervención Penal: El Derecho Penal De Las Personas Jurídicas*, en A. Messuti, J.A. Sampredo Arrubla (Comps.), *La Administración de Justicia en los albores del tercer milenio*, Buenos Aires, pp.65-80. , 2001.
- DEL ROSAL BLASCO, y OTROS. *La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Importantísimas Novedades que se avecinan*. Clifford Chance, Client Briefing. Madrid. 2013.
- ESPINOZA GUTIÉRREZ, Sandra "la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la culpabilidad", lima Perú 2011.
- FEIJOÓ SANCHEZ, B. *¿Hacia una teoría sistémica o hacia una teoría intersubjetiva de la comunicación?*", en *Teoría de Sistemas y Derecho Penal. Fundamentos y posibilidad de aplicación*, Ara, Lima, 2007.

- FERRARA, F. *Teoria delle persone giuridiche*, UTET, primera edición, Torino, 1923.

- FERRATER MORA, J. *Diccionario de Filosofía*. Editorial CL, Valencia. 1991.

- FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “*Derecho de las personas*” *Exposición de motivos y comentarios al libro primero de Código Civil peruano*. Editorial GRIJLEY. Octava edición. Lima 2000.

- GÓMEZ TOMILLO, M: *Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español*. Lex Nova, Valladolid, 2010.

- GUIÑAZU MARIANI, M. *Las personas jurídicas en el Derecho Romano. XVII Encuentro Nacional de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina: Homenaje al Dr. Luís Rodolfo Arguello*. PubliFadecs (Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue, octubre de 2005.

- HABERMAS, J. *Teoría de la acción comunicativa I. Racionalidad de la acción y racionalización social*. Versión castellana de Manuel Jiménez Redondo. Taurus. 2003.

- HABERMAS, J. *Teoría de la acción comunicativa II. Crítica de la razón funcionalista*. Versión castellana de Manuel Jiménez Redondo. Taurus. Grupo Santillana de Ediciones, S. A, 2003.

- MADRID CONESA, F. *El Principio de Irretroactividad de la Ley Penal y las Variaciones Jurisprudenciales Desfavorables al Reo, en Colección de Estudios. Serie Minor. Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal. Universidad de Valencia .1982*
- MADRID CONESA, F. *La Legalidad del Delito. Colección de Estudios. Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal. Universidad de Valencia. 1983.*
- NIETO MARTÍN, A. *La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legistivo. Iustel. Madrid. 2008.*
- NÚÑEZ CASTAÑO, ELENA, *La Responsabilidad Penal en la empresa, Editorial Tirant lo Blanch, S.L. 2001.*
- NÚÑEZ CASTAÑO, ELENA, *La Responsabilidad Penal en la empresa Editorial Tirant lo Blanch, S.L., 2001.*
- LUZÓN PEÑA, DM. *Lecciones de Derecho Penal. Parte General.Valencia, 2012. Tirant Lo Blanch.*
- PALIERO, C.E. *Problemas y perspectivas de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho italiano. Anuario de Derecho Penal de la Universidad de Fribourg, 1996.*

- POLAINO NAVARRETE, M. *Acción, omisión y sujetos en la teoría del delito (de la posición de garante a la responsabilidad penal de las personas jurídicas)*, Grijley. Perú, 2009.
- SAVIGNY, M. F. C de; Durán y Bas, Manuel (pról.). *Sistema del Derecho Romano Actual*, Reimp. de la edcn. de Madrid, Centro editorial de Góngora. Analecta Editorial ANALECTA. 2004.
- SCHÜNEMANN, “*La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea*”, en A.A.V.V., “*Hacia un derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Profesor Klaus Tiedemann*”, Editorial Boletín Oficial del Estado. Madrid, 1995.

REVISTAS

- BACIGALUPO SAGGESE, S: “*La Problemática del Sujeto en el Derecho Penal*”. Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE, 1997.
- DANNECKER, Gerhard, “*Reflexiones sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas*”. En: Revista penal. N° 7, La Ley, salamanca, 2001.
- FERNÁNDEZ SESSAREGO, C. *Naturaleza Tridimensional de la persona jurídica*. Derecho PUCP, n° 52, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, abril-diciembre de 1999.

- GARCIA CAVERO, Percy. *"Las medidas aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal peruano"* artículo publicado en *Revista de Derecho, Universidad de Piura*. Vol 7-2006 .
- GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, AE. *Cuestiones procesales en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas*, *Revista Internauta de Práctica Jurídica*. Núm. 26, págs. 79-92. 2011.
- GRACIA, MARTÍN L. *La cuestión de la responsabilidad de las propias personas jurídicas*". *Revista Peruana de Ciencias Penales* N° 4- Julio- Diciembre de 1994.
- LÓPEZ WONG, R: *"Acerca de la de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Determinación de la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias: ¿Sanción penal o medida administrativa?"*, en *Urbe et Ius Revista de análisis Jurídico*. Año I. Newsletter Número. 6.Argentina. 2005.
- LUZ CASTANY, M. *Fundamentos del funcionalismo de Günter Jakobs.Dogmática y Derecho en LEHMANN*. *Revista Jurídica Online*. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Católica de Guayaquil – Ecuador. Edición 21. 2006.

PÁGINAS WEB

- www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/respo_pjuridicas.doc
- <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13300/13923>
- http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/Articulos_estudiantiles/08-2011_Responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf
- [CUADRADO RUIZ, MA. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un paso hacia adelante...¿Un paso hacia atrás?. Revista Jurídica de Castilla Y León. N.º 12. Abril 2007. ----
http://www.larioja.org/upload/documents/687033_RJCYL_N_12-2006_La_responsabilidad_penal.pdf.](http://www.larioja.org/upload/documents/687033_RJCYL_N_12-2006_La_responsabilidad_penal.pdf)